

Coronavirus y pobreza

**ENFRENTAMOS
LAS DOS
PANDEMIAS**

EN TODO EL PAÍS

**GRAN JORNADA DE LUCHA
DEL SINDICALISMO COMBATIVO**



Los contagios no dan tregua y ya estamos aproximándonos al pico de la pandemia. Es común que cualquier habitante del AMBA (Capital y conurbano) a esta altura se entere de que un familiar, vecino, compañero de trabajo o pariente haya contraído el Covid-19. Esto se da en momentos en que el gobierno nacional, Kicillof, Larreta y los gobernadores, más allá de sus “diferencias” mediáticas, han flexibilizado peligrosamente e irresponsablemente la cuarentena. La apertura de la industria en la provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, va de la mano con las caminatas de los *runners* habilitadas en Capital. Que haya más actividad –como lo vienen exigiendo las grandes patronales– aumenta la circulación de millones en los medios de transporte facilitando el contagio. Y se está dando la vergüenza nacional de que, a tres meses de declarado el aislamiento obligatorio, los trabajadores y profesionales de la salud tengan que seguir protestando porque no tienen insumos y protección, o tener que lamentar muertes como la de la enfermera del Gandulfo, que se infectó y falleció porque no le dieron la licencia.

La pandemia del coronavirus se une a otra, la de la crisis social y económica que se descarga sobre el pueblo trabajador. Si decenas de miles están obligados a “romper la cuarentena” para lograr el sustento diario es culpa del gobierno nacional del Frente de Todos de Alberto Fernández, con el acompañamiento de los gobernadores e intendentes de todos los colores. ¿O acaso los 10.000 pesos asignados a quienes hacen changas son suficientes? Si dividimos la cifra por los meses en que se cobrará se trata en realidad de 5.000 pesos mensuales. ¿Alguien cree que con eso se puede quedar en su casa evitando el contagio?

Los pequeños comercios, talleres y kioscos piden préstamos y no se los dan, mientras que el Estado le paga el 50% de los salarios a multinacionales y grandes empresas, o les da créditos a patronales explotadoras.

Que se les haya rebanado el 25% de los salarios a los trabajadores a través de un pacto entre la UIA, la CGT y el gobierno y les sigan robando a los jubilados es un ajuste repudiable en plena pandemia y crisis social. Con la frase de Alberto Fernández “el Estado va a ayudar a todos”, se sigue subsidiando a las grandes empresas mientras dejan correr la campaña contra

los que luchan y la izquierda, acusándolos de “minorías irresponsables”, como dijo el ministro Ginés González García, o con los planteos de dirigentes sindicales afines al gobierno que llaman a ser “responsables” cuando no mueven un dedo ante la crítica situación que sufren millones de trabajadores.

Para combatir las dos pandemias se necesitan medidas de fondo. Alberto Fernández no hace ningún anuncio, ni aunque sea insuficiente, desde hace semanas. ¿Y el impuesto a la riqueza? Pasan los meses y el proyecto todavía no fue presentado. Lo usan como campaña

ajuste y será mayor en el futuro si la Argentina sigue sometida al Fondo Monetario y pagando una deuda fraudulenta.

El sindicalismo combativo y la izquierda levantan una clara propuesta para combatir las dos pandemias. En primer lugar, llamando a que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador. Es lo que se hizo valer en la jornada nacional de protesta de este martes convocada por el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo. Se dijo ¡no a la rebaja salarial y jubilatoria! ¡basta de despidos y suspensiones! Que se estatice toda fábrica

que cierre o despidas. Que se expropien Penta. Que se aumenten los salarios, repudiando la postergación de las paritarias acordadas con la CGT y las CTA. Exigimos un aumento de emergencia que cubra la canasta familiar, un salario social en cuarentena de 30.000 pesos para todo aquel desocupado o quien lo necesite. Plata para los hospitales y la salud pública, no para las clínicas privadas, como hizo Kicillof, destinando 400 millones de pesos desfinanciando el IOMA, entre otras medidas.

En segundo lugar, decimos que hace falta imponer un fondo de emergencia con un impuesto especial a los grandes grupos empresarios nacionales (Bulgheroni, Techint, Arcor, Perez Companc,

Coto, Eurnekian, Grobocopatel), a las multinacionales, a la gran banca (HBSC, Santander, BBVA-Francés, Galicia, Macro, Citi Bank, entre otros) y suspender de inmediato todo pago de deuda. De esa forma se obtendrían 20.000 millones de dólares para volcar a la emergencia.

Esta pelea la damos en las luchas, en las calles, en los plenarios de trabajadores, en los debates televisivos y en el Congreso. Al día de hoy los únicos proyectos que hay en el Parlamento para imponer de verdad un impuesto a la riqueza y para que se deje de pagar la deuda externa y se rompan los lazos con el FMI (iniciativa de la diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer) son los del Frente de Izquierda Unidad. Y ahora se sumó el que exige la estatización de Vicentin bajo control de sus trabajadores. Llamamos a seguir apoyando y coordinando las luchas en curso y a seguir postulando y peleando por esta salida de fondo.

Coronavirus y Pobreza: La batalla contra las dos pandemias



recurriendo al doble discurso “contra la derecha”, pero se trata de una cortina de humo. ¿Por qué en plena pandemia no cobrarle un impuesto especial a Techint, las petroleras, las automotrices, los grandes laboratorios, bancos, privatizadas y terratenientes? Al gobierno se le está cayendo la careta con el doble discurso. Viene hablando de los empresarios “vivos” pero no los toca mientras la crisis capitalista la descarga sobre el pueblo trabajador.

¿Y la deuda eterna? ¿Cómo puede ser que la negociación con los bonistas sea la prioridad de este gobierno autodenominado “popular”? ¿Cómo puede ser que les siga mejorando la oferta a los bonistas usureros internacionales amigos de Donald Trump como paso previo a encarar otro pacto con el FMI, reconociendo el endeudamiento que nos dejó Macri con una estafa mil veces mayor que la de Vicentin con el Banco Nación? Encima, el gobierno dice que si hay un arreglo por la deuda se podrá aplicar en los próximos años un plan económico “sustentable y sostenible”, cuando ya ahora hay un

Expropiación de Vicentin: 100% estatal y bajo control de los trabajadores

Escribe **José Castillo**

El mayor monopolio agroexportador de capital nacional, Vicentin, entró en convocatoria de acreedores tras una maniobra fraudulenta realizada a los ojos de todos. Ahora han trascendido nuevos “datos”. La empresa se benefició con una cantidad increíble de créditos durante el gobierno de Macri y recurrió a todas las maniobras posibles para evadir impuestos y fugar divisas. En la última etapa, directamente se lanzó a una maniobra de vaciamiento con la complicidad del entonces presidente del Banco Nación Javier González Fraga y el obvio visto bueno de todo el gobierno de Cambiemos. En el medio dejó un tendal de deudas por 100.000 millones de pesos, que incluye a bancos estatales (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires), privados nacionales y extranjeros, la AFIP, el gobierno y varias municipalidades de la provincia de Santa Fe y, lo más grave, dos mil pequeños productores a los cuales nunca les pagó la soja que Vicentin ya vendió y cobró del exterior.

Dentro de estas maniobras está todo el proceso de triangulación por medio de empresas fantasmas (Vicentin Paraguay, Uruguay y Panamá) y la entrega de la mayoría del paquete accionario de Renova (la mayor planta de biodiésel de la Argentina) a la multinacional suiza Glencore, a cambio de un dinero que nadie sabe dónde está.

El conjunto de la patronal, sus cámaras empresarias, medios de comunicación –como el Grupo Clarín o La Nación–, Juntos por el Cambio, Lavagna y hasta ex funcionarios peronistas kirchneristas como el mismísimo Guillermo Moreno, salieron de punta a oponerse a la expropiación, denunciando la “violación a la propiedad privada”. Entre toda la estrategia discursiva que desplegaron, la que se destacó fue mostrar a Vicentin como una empresa nacional, familiar, nacida y desarrollada en la pequeña ciudad de Avellaneda, en el norte santafecino, “benefactora de la comunidad”, que simplemente había tenido un problema financiero “coyuntural” que la había obligado a solicitar el concurso de acreedores.

Muy lejos de la realidad está esa imagen idílica que se quiere vender de Vicentin, bucólicamente campesina, casi al estilo de la familia Ingalls o de Bonanza. Se trata, en cambio, de una empresa que hizo negocios con todos los gobiernos desde hace décadas. Participó en la represión de la dictadura militar, marcando y permitiendo el secuestro de trabajadores de la firma y hasta utilizando para el acta del operativo una máquina de escribir de la propia empresa. Se benefició con la estatización de la deuda externa privada llevada adelante por Domingo Cavallo en el final de la dictadura. Luego tuvo crédito abierto del Banco Nación durante décadas (de hecho, el mayor salto en su endeudamiento se dio durante el gobierno kirchnerista). Participó del circuito de las coimas durante ese gobierno (uno de sus dueños figura en la causa de los cuadernos). Y, por supuesto, después tuvo todas las relaciones habidas y por haber con el macrismo, desde ser su principal aportante de campaña hasta haber intentado colocar el candidato oficialista a gobernador de Santa Fe (no lo fue por el veto de Elisa Carrió, que justamente los acusó de “corruptos”).

Nada de “salvataje”, ¿estatizar ya mismo!

El presidente Alberto Fernández dijo repetidas veces que de lo que se trata es del “salvataje” de la empresa. Seamos claros, a los que hay que salvar es a los trabajadores de la empresa, a los pequeños productores estafados, al patrimonio de los bancos estatales perjudicados, a la AFIP y a las municipalidades a las que este pulpo exportador no les pagó.

“Salvataje” y “rescate” es justamente lo que quiere Vicentin y apoya el conjunto de la patronal: que el Estado se haga cargo de las deudas, “capitalice” (léase ponga plata en la empresa) y le permita a la firma seguir con sus negociados. Lo que corresponde es la expropiación lisa y llana de la totalidad de los activos del grupo y que los dueños, la familia Vicentin, respondan con su propia riqueza acumulada por la deuda que generaron. Ellos y sus socios en la estafa, como



Javier González Fraga, deben responder con sus propios patrimonios por el desastre que generaron. Y ante el planteo de que ese dinero “no alcanza” para pagar todas las deudas, la respuesta es clara, una auditoría profunda que determine, tras el pago a los trabajadores, los pequeños productores, los bancos estatales, la AFIP y las municipalidades, si hay algún otro al que debe abonársele o si se trata de cómplices en la maniobra de vaciamiento. Y, desde ya, está cantado quiénes no deben cobrar: los bancos internacionales que ahora aparecen como acreedores.

La estatización debe alcanzar a todo el grupo

Es tan cierto que Vicentin tiene que ser tomado como grupo en su totalidad que, justamente, un pool de estos bancos, encabezado por el mismísimo Banco Mundial y en el que también participan los holandeses FMO, ING Bank y Rabobank y los franceses Natixis y Credit Agricole iniciaron un procedimiento para averiguar cuáles son los activos del Grupo Vicentin en el mundo (el procedimiento se llama justamente Discovery) para así poderle “cobrar” su deuda. Vicentin le debería 16.504 millones de dólares al Banco Mundial (a su brazo que le presta a los privados, la Corporación de Fomento Internacional), 9.228 al FMO y sumas algo menores al resto de los bancos internacionales, hasta totalizar una deuda externa por 33.137 millones de dólares.

Por eso es fundamental que la estatización alcance a todo el grupo, y no solo a Vicentin SAIC, la cerealera. Hay que estatizar Renova y las otras plantas de oleaginosas, Textil Avellaneda, las bodegas, las empacadoras y, por supuesto, el puerto privado de la empresa. En el caso de Renova hay que desconocer la supuesta “venta” del paquete accionario a la multinacional Glencore, efectuada ya en medio de la etapa final del vaciamiento.

¿Por qué debe ser 100% estatal?

El gobierno estaría hablando de crear una sociedad anónima, de economía mixta, con la participación de Vicentin más las operaciones que hoy están a cargo de YPF Agro. No es esa la salida que se necesita. La propia experiencia de la estatización parcial de YPF es el mejor ejemplo. En su momento se creó YPF S.A. con mayoría estatal y 49% de participación privada. Esta figura jurídica (ser una sociedad anónima y no una sociedad del Estado) es la que permitió que se haya llevado adelante el acuerdo secreto con Chevron, pieza maestra del comienzo del saqueo y la destrucción del ambiente en Vaca Muerta. Las empresas mixtas son una cobertura que se usa en muchos países del mundo para esconder a un Estado que se hace cargo de las

pérdidas mientras, por atrás, accionistas privados se hacen con las ganancias de los grandes negocios.

¿Por qué debe estar bajo control de los trabajadores?

La segunda cuestión es quién debe gerenciar la futura empresa expropiada y estatizada. No tenemos dudas, deben ser los propios trabajadores, acompañados en todo caso en el control por los pequeños productores. No tenemos que repetir experiencias como la de Aerolíneas Argentinas, que luego de la estatización se transformó en una caja de negocios y clientelismo del peronismo kirchnerista, y de La Cámpera en particular.

Una discusión de fondo es si los trabajadores pueden gestionar una empresa de esas dimensiones. Respondemos tajantemente que sí, recurriendo, por supuesto a profesionales y técnicos comprometidos con la clase trabajadora para los detalles específicos que sean necesarios, pero apelando, siempre, al conocimiento y la decisión final de los propios trabajadores que, durante décadas, aportaron con su esfuerzo a la existencia de la empresa.

Con Vicentin sola no alcanza, hay que nacionalizar el comercio exterior

El gobierno de los Fernández insiste en que la expropiación de Vicentin busca cumplir tres objetivos: tener una empresa testigo del mercado de cereales, evitar la extranjerización del comercio exterior y apuntar a la “soberanía alimentaria”.

Para que todo esto no se termine transformando en un nuevo ejemplo de doble discurso, tenemos que decir que con Vicentin solo no alcanza. Se trata de apenas el 9% del total de las exportaciones agropecuarias. El 90% restante lo manejan los grandes pulpos extranjeros (Cargill, Dreyfuss, ADM y Cofco, y, como socios menores, otras grandes empresas locales, como Aceitera General Deheza y Molinos). Y eso nadie lo controla, de hecho desde el menemismo, cuando se cerró la Junta Nacional de Granos, todos los gobiernos posteriores sin excepción dejaron correr la máxima libertad para que estos pulpos internacionales hicieran lo que quisieran. Por eso, junto con la expropiación de Vicentin y su conversión en una empresa 100% estatal gestionada por sus trabajadores, hay que avanzar en la nacionalización del comercio exterior. Como, aunque sea parcialmente, existió en nuestro país en la época del primer peronismo con el IAPI. De esta forma sí se tendrán las herramientas para decidir cuánto se exporta, cuánto se dedica al mercado interno, y a qué precios, priorizando la mesa del pueblo trabajador y no, como ahora, los negocios de las grandes transnacionales.

El FIT-Unidad presentó su proyecto de estatización de Vicentin

Escribe **Claudio Funes**

Apoyamos y hacemos nuestro el proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional por los diputados Romina del Plá (PO) y Nicolás del Caño (PTS), en nombre del Frente de Izquierda Unidad, para que se proceda a la expropiación de los activos de la empresa Vicentin S.A.I.C. y Vicentin Family Group, de todas las compañías dependientes del *holding* y su estatización bajo control y gestión de los trabajadores.

El proyecto plantea la expropiación sin indemnización y establece la defensa de la continuidad laboral y el pago integral de los salarios a todos los trabajadores, así como la defensa del convenio colectivo de trabajo. Dispone asimismo la apertura de los libros contables de la empresa “para verificar las maniobras delictivas que se realizaron contra el pueblo de la Nación” y la creación de una comisión investigadora —elegida por los trabajadores— para inventariar la totalidad de los bienes y contribuir a la investigación de todos los ilícitos y maniobras fraudulentas cometidos por la empresa.

A continuación, resaltamos los artículos más importantes del proyecto:

Artículo 1º.— Decláranse de utilidad pública y sujetos



a expropiación los activos de la empresa Vicentin S.A.I.C. y Vicentin Family Group.

Art. 2º.— Esta expropiación se consumará sin pago de indemnización alguna, bajo ningún concepto, al grupo empresario que ostentaba la propiedad de este holding [...]

Art. 3º.— Se prohíben los despidos y suspensiones de todo el personal, cualquiera sea su modalidad de contratación,

que desempeña actividades laborales bajo la órbita de Vicentin S.A.I.C., Vicentin Family Group y firmas dependientes de ambos grupos societarios.

Art. 4º.— La administración y explotación de los activos de las empresas expropiadas, en todas sus diversificaciones, quedará a cargo del Estado nacional y su operatoria estará bajo la gestión directa de sus trabajadores.

Art. 6º.— Se constituirá una comisión investigadora, integrada por trabajadores y electa por el voto directo de sus pares, quienes designarán a los profesionales y técnicos de su confianza

para inventariar la totalidad de los bienes de la empresa, plantas industriales, puertos, sociedades de servicios y sociedades vinculadas de todo orden.

Art. 7º.— Por el presente artículo quedan inhibidos y sujetos a embargo la totalidad de los bienes y fortunas personales de los accionistas de los grupos empresarios comprendidos en esta ley radicados en el país, tanto bienes raíces como tenencias financieras u otras de todo orden.

¿Como fueron las estatizaciones en Venezuela?

Escribe **Claudio Funes**

La intervención estatal al gigante agroexportador Vicentin, así como el posible envío al Congreso de un proyecto para su expropiación por parte de Alberto Fernández, ha desatado los temores de las grandes patronales hasta el límite de la histeria.

A través de la prensa escrita, radio y televisión se han dado oscuras previsiones, debates y comparaciones con la Venezuela de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

Uno de los que mejor expuso esta preocupación fue Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural y ex ministro de Agroindustria de Macri. Auguró que el país será “como Venezuela, que empezó con un latiguillo, como era la frase tragicómica de Chávez con el ‘expropiarse’”. Estos sectores patronales quieren usar el evidente fracaso del chavismo para cuestionar las estatizaciones.

¿Qué pasó en Venezuela?

El fracaso del chavismo no radica en las estatizaciones. Es lo contrario. El chavismo llegó al poder en 1998 prometiendo justicia social, democracia participativa y anunciando que iba a revertir la entrega de la industria petrolera a capitales transnacionales.

Pasados más de veinte años, el tiempo sobra para hacer un balance. El chavismo realizó una intensa campaña diciendo que bajo su gestión la industria petrolera fue renacionalizada. ¿Esto fue así? La realidad es la opuesta, el chavismo tiene la responsabilidad de haber aumentado la inserción de las transnacionales petroleras.

En 2006, con el nombre “Plena Soberanía Petrolera”, se anunció el plan mediante el cual se podrían asociar a Pdvsa capitales privados. Surgió así el formato de la empresa mixta. Las primeras en firmar fueron Chevron, Repsol, Shell, Total, Petrobras y Exxon Mobil, entre otras. Las empresas mixtas resultaron ser organizaciones totalmente autónomas que declaran las ganancias a sus accionistas. Al mismo tiempo, Chávez rechazó cualquier tipo de gestión o cogestión obrera dando como excusa que el petróleo es una industria estratégica. No podía ser de otra manera. Ya que la otra cara del acuerdo con las saqueadoras fue el compromiso de Chávez para hundir el convenio colectivo de trabajo y las conquistas de los trabajadores petroleros para garantizar más ganancias a las multinacionales.

La realidad fue entonces que, más allá de ciertos roces, Chávez jamás rompió con el imperialismo. Mantuvo la empresa Citgo Petroleum Corporation, subsidiaria de Pdvsa, con 13.500



estaciones de servicio en los Estados Unidos y le continuó enviando miles y miles de barriles al “imperio”.

Lo que fracasó y llevó al colapso a la propia industria petrolera venezolana fue este esquema de empresas mixtas. Las importaciones de derivados del petróleo como la nafta superan las exportaciones, pese a que Venezuela tiene uno de los complejos refinadores más grandes del mundo. Esta es la razón por la que llegan a Venezuela barcos de Irán con combustible. A eso llevó el saqueo.

Por estatizaciones del 100 %

Lo que Chávez nunca quiso hacer es echar a las multinacionales petroleras y que el Estado tome el control de la mayor fuente de riqueza de Venezuela, el petróleo. De hecho, el chavismo planteaba la empresa mixta con una mayoría estatal de 51% y el resto en manos del capital transnacional asociado. El pueblo venezolano y miles de luchadores antiimperialistas del mundo creían que efectivamente Chávez había nacionalizado el petróleo. Por eso fueron justamente nuestros compañeros del Partido Socialismo y Libertad (sección venezolana de la UIT-CI), los que se vieron obligados a agregar el número

100% para exigir una verdadera estatización del petróleo. Era la forma de lanzar una consigna contrapuesta al engaño del 51% del chavismo. Así popularizaron “por una Pdvsa 100% estatal dirigida por sus trabajadores” como la única medida que permitiría acabar con el saqueo a un país capitalista y semicolonial. La gestión y el saqueo de esas empresas mixtas fueron justamente los que arrastraron al pueblo venezolano a este presente de ajuste y hambre.

“¡Expropiarse!”, el latiguillo del que habla Etchevehere, fue pronunciado por Chávez en varias ocasiones luego de su reelección en 2006, en especial refiriéndose a algunas empresas industriales. La experiencia fue un fracaso. Las llamadas “expropiaciones” no fueron más que compras a precios siderales que no trajeron ningún beneficio para sus trabajadores ni para el país. En la mayoría de los casos se trató de pura propaganda, y en otros fue la vía libre para el saqueo con el citado esquema de empresas mixtas.

Muchas de estas empresas “expropiadas” hoy están cerradas, semiparalizadas o en crisis terminal. Esto fue consecuencia también de quienes se hicieron cargo de la administración: burocratas, “boliburgueses”, sin ninguna participación ni respeto

por los convenios de los propios trabajadores. Nuestra propuesta siempre fue la inversa, que la gestión deben realizarla los propios trabajadores. Ellos son los que tienen los conocimientos y capacidades para ponerlas en marcha. Como ya se había visto en la propia Venezuela en 2003, ante el lockout en la mismísima industria petrolera, fueron sus propios trabajadores, con el fortísimo protagonismo de dirigentes sindicales del PSL, como Orlando Chirino y José Bodas, los que la pusieron en marcha.

¿Y por casa?

En la Argentina, en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner se produjo la expropiación parcial de YPF. El proyecto de ley impulsado por el FpV planteaba que la petrolera continuara siendo una sociedad anónima, que cotizara en Bolsa y que, por lo tanto, debería atender la orientación exigida por los accionistas privados. La empresa mixta, una vez más, es el artilugio para que el Estado se haga cargo de las pérdidas, y los privados, de las ganancias. Hoy estamos ante el mismo peligro con la propuesta del gobierno peronista de que Vicentín pueda ser una empresa mixta con el 51% estatal.

La gestión del peronismo kirchnerista presentó la “re-estatización” de YPF como “la recuperación de la soberanía petrolera”. Repsol recibió 5.000 millones de dólares en bonos y los saqueadores mantuvieron vía libre para seguir haciendo

negocios, como quedó demostrado posteriormente con la escandalosa entrega a Chevron.

A partir de su fundación (1922) YPF, a medida que exploraba y encontraba yacimientos, promovía la apertura de escuelas, caminos, hospitales y viviendas. Sus redes de estaciones de servicio cubrían todo el país hasta los rincones más lejanos. En el rubro exploración llegó a tener dos plataformas marítimas de primer nivel mundial. En su momento fue también pionera en la construcción de refinerías. YPF estatal fue un modelo para toda Latinoamérica, con su asesoramiento se fundaron empresas estatales de petróleo en Brasil, Bolivia y Perú. Al igual que el ferrocarril, YPF integraba la nación. Este ejemplo demuestra que la propiedad estatal puede ser eficiente y satisfacer las necesidades populares.

Desde Izquierda Socialista seguiremos reclamando por retomar el control de las riquezas del subsuelo y colocarlas al servicio de los sectores populares con una YPF 100% estatal y dirigida por sus trabajadores.

Lo mismo exigimos para Vicentín y todas las actividades que hoy están en manos del gran capital y las multinacionales, como el comercio internacional de granos y alimentos, la energía eléctrica, la distribución de gas, los ferrocarriles, la educación y la salud, hoy escamoteada en plena pandemia.

Todas estas actividades esenciales deben estar al servicio

de satisfacer las necesidades populares y no ser fuente de ganancias para los capitalistas. Solo con la estatización sin indemnización y el control de los trabajadores alcanzaremos la soberanía política y económica.

Fuente: **¿Por qué fracasó el chavismo?**
de Simón Rodríguez Porras
y Miguel Sorans.
Editorial Cehus



NACIONAL

Por una cuarentena sin hambre ni despidos

Escribe **Martín Fú**

El gobierno nacional continúa extendiendo el aislamiento social. Pero con cada nuevo plazo se “oxigena” y flexibiliza la cuarentena. Cada vez más actividades se van abriendo y se suman miles de trabajadores a sus puestos de trabajo. La cuarentena, se va “disolviendo” para volver a la producción, junto con la apertura masiva de industrias y comercios. Mientras tanto, y en particular en el AMBA y en el Chaco, los números de contagiados nos indican que todavía no hemos llegado ni siquiera al pico de la pandemia.

El presidente Alberto Fernández dice estar preocupado y deslizó la posibilidad de volver a la primera fase. Fernández, Larreta y Kicillof se tiran la pelota y hasta culpan a los mismos vecinos de “no cuidarse”. Pero hasta el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se contagió y sonaron las alarmas entre los funcionarios.

Tenemos que ser claros: La cuarentena pierde fuerza por dos motivos. El primero es que, más allá de las conferencias de prensa, el gobierno nacional -primer responsable- y los gobiernos de la provincia de Buenos Aires (Kicillof) y CABA (Larreta) le ceden todo el tiempo a las presiones de las patronales y autorizan más y más aperturas, obligando en cada caso a miles de trabajadores a movilizarse hacia sus trabajos, con el consiguiente riesgo de contagio también en los medios de transporte.

El segundo motivo es la imperiosa necesidad de salir a “ganarse un peso” de decenas de miles de sectores populares que ya no tienen que comer. Por eso el crecimiento exponencial de los contagios viene teniendo como epicentro a los barrios más humildes y marginados de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que nuevamente muestran lo vulnerable que es vivir en la pobreza. En CABA, la Villa 31 de Retiro y los barrios de Flores, Lugano y Villa Soldati están a la cabeza. En la provincia de Buenos Aires Villa Azul e Itatí en Quilmes, y Don Torcuato y Tigre en zona norte, son las que poseen más personas afectadas. El hacinamiento, la falta de agua potable, las carencias históricas en infraestructura, la precariedad e informalidad laboral de sus vecinos hacen que los más humildes sean los principalmente expuestos al contagio del Covid-19. La pobreza, muy a pesar



del “olvido” de los gobiernos, es un factor de riesgo del que no quieren hablar.

Los trabajadores de la salud siguen siendo la población laboral con más contagiados, 10% de la masa total. El virus no discrimina entre quienes trabajan en el sistema de salud pública o en el de la privada, ambas denunciadas por los propios trabajadores, quienes siguen reclamando insumos esenciales que, en muchos casos, ellos mismos compran, al no recibir barbijos o desinfectantes de parte de las clínicas, los sanatorios o los hospitales. Los geriátricos siguen siendo el eslabón más débil, donde nuestros viejos se contagian.

El sector industrial, que como dijimos más arriba viene “normalizando la producción”, no es ajeno a los contagios. Las patronales desde marzo vienen presionando para liberar la mayor cantidad de ramas de producción y no han invertido un peso en desarrollar y aplicar un protocolo ante el Covid-19. El Sutna paró por los infectados que hay en FATE y por el incumplimiento del protocolo de seguridad. Mondelez Pacheco tiene al turno noche con una gran cantidad de trabajadores con Covid-19. Los empresarios, ávidos de que todos vuelvan a sus puestos, no garantizan las condiciones mínimas y necesarias de higiene y seguridad, al mismo tiempo que aplican rebajas salariales, mientras la burocracia sindical mira para otro lado a pesar de las denuncias. La amenaza de no pagar el aguinaldo, o de hacerlo en cuotas, es otro de los temas que se viene instalando en los últimos días, como si los trabajadores no tuvieran motivos

para preocuparse o acrecentar su bronca ante el riesgo de contagio que involucra tener que viajar en el transporte público en medio de la pandemia, o estar en el lugar de trabajo, donde día a día los casos positivos van creciendo.

El problema central, entonces, no es el *running*, más allá de lo discutible de la medida tomada por Larreta que provocó que miles salieran a correr por las calles porteñas. O las irresponsabilidades de algunos pocos que rompen la cuarentena sin motivo, hecho que también hay que repudiar.

Seguimos insistiendo: estamos por una cuarentena sin hambre ni despidos. Para poder garantizar esto hace falta más dinero para salud e infraestructura. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad proponemos que sea sobre la base de un fondo de emergencia que proceda de un impuesto especial a los grandes grupos empresarios nacionales, las multinacionales y el no pago de la deuda externa. Hay que priorizar el presupuesto para salud, con salarios dignos para sus trabajadores y que no falten insumos. Otorgar 30.000 pesos a los que menos ganan, alimentos para quienes los necesiten y condiciones dignas para los barrios más postergados. Prohibir efectivamente despidos y suspensiones y que no se rebajen los salarios. Que la crisis la paguen los patrones, no los trabajadores.

Kicillof vacía el IOMA

Escribe **Claudio Funes**

El 10 de junio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que se busca fortalecer el sistema de salud privado para hacer frente al pico de contagios que se espera en julio.

Para ello, el gobierno meterá sus manos en el Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA), la obra social de los empleados públicos bonaerenses. Le robará 400 millones de pesos mensuales para sostener sueldos y gastos del sector de la salud privada. Rescatará a los mismos capitalistas que cobran aranceles por encima del IOMA y que año tras año obtuvieron ganancias millonarias.

Junto con el ministro de Salud Daniel Gollán, Kicillof anunció cínicamente la “integración” de los sistemas de salud público y privado bonaerenses.

“La pandemia golpeó al sector privado y llevó a las empresas a un estado de insostenibilidad”, dijo Kicillof, y continuó: “No nos podemos dar el lujo de que en medio de una pandemia las empresas empiecen a quebrar”.

Nuevamente el doble discurso para hacer pasar una verdadera estafa a los trabajadores que profundizará el vaciamiento del IOMA.

Con total impunidad, el gobernador se justificó manifestando que el dinero sale del “ahorro” realizado por el instituto. Lo que afirma es una falacia, ya que una obra social no es una empresa, no debe tener superávit, debe mejorar permanentemente sus servicios. No es ahorro, es subejecución del presupuesto.

Es el mismo Kicillof que no tuvo empacho en pagar 250 mi-



llones de dólares a los buitres con el dinero de 280.000 docentes, a quienes no les abonaron el porcentaje de la cláusula gatillo correspondiente a diciembre.

Según datos oficiales de 2019, el IOMA tiene más de 2.6 millones de afiliados. Con el 4,8% del sueldo que aportan los trabajadores afiliados y otro 4,8% que paga el Estado como empleador, el presupuesto de 2019 superó los 53.000 millones de pesos. Como se puede apreciar, no es dinero del Estado, es de los trabajadores afiliados.

Con tamaño presupuesto, las prestaciones deberían ser de excelencia. Pero no es así, el estado provincial, en vez de actuar como simple agente de retención, dispone del propio dinero de los trabajadores a su arbitrio.

La obra social viene sufriendo, desde hace años, un grave deterioro en sus coberturas. Redujo las prestaciones y pone trabas burocráticas para dificultar el acceso a tratamientos. Adeuda

pagos a profesionales que, como consecuencia, dejan de atender a los afiliados.

Se demoran las internaciones, se rechazan solicitudes, tardan meses para autorizar tratamientos oncológicos, de diabetes y enfermedades autoinmunes que, en el marco del aislamiento, agravan todas estas situaciones.

El vaciamiento del IOMA no es de ahora, es una política permanente que han llevado adelante todos los gobiernos peronistas de la provincia, incluyendo a Vidal, y ahora a Kicillof.

Se replica la política de Alberto Fernández, les quitan a los trabajadores para subsidiar a los capitalistas.

Esta política vaciadora y criminal que se traduce en la muerte de compañeras y compañeros es acompañada desde hace años por la burocracia traidora del Frente de Unidad Docente Bonaerense y, principalmente, por el Suteba de Roberto Baradel.

Desde Izquierda Socialista reclamamos que los fondos del IOMA estén al servicio de sus afiliados y que cubran todas las prestaciones médicas que hoy se les niegan, y que el instituto sea administrado solo por sus trabajadores y afiliados.

Oponiéndonos por el vértice a la política de Kicillof, afirmamos que para luchar eficazmente contra la pandemia es necesaria la creación de un fondo de emergencia que se financie con un impuesto a las grandes empresas, bancos y multinacionales, sumando a esto el no pago de la deuda externa. Junto con esta medida se debe nacionalizar la salud privada para que el Estado pueda integrar y centralizar de verdad todos los recursos disponibles para que no falte una cama ni un respirador.

El doble discurso del sindicalismo K

Escribe **Diego Martínez**

Mucho se habla en estos días a través de los medios de comunicación de que en el gobierno habría dos alas. Una “moderada”, y otra “radicalizada” representada por los dirigentes más allegados a Cristina Kirchner y a la centroizquierda. Según esta lectura, este sector “más progresista” sería el que habría propuesto un impuesto a las grandes fortunas, que todavía sigue sin presentarse en el Congreso, y que no se sabe en qué va a terminar.

Pero la realidad es que para el común de los trabajadores no hay “alas” que valgan. Crecen las suspensiones y los despidos, se rebajan los salarios un 25% vía el acuerdo CGT-UIA-gobierno, se anuncia “0%” de aumento para los estatales, los trabajadores de la salud se siguen contagiando mientras continúan sin recibir los insumos básicos, el hambre sigue creciendo en los barrios.

El dirigente de ATE Cachorro Godoy, de esa supuesta ala “progresista”, vinculado a Claudio Lozano, explicó esta situación diciendo que “el gobierno tiene buenas intenciones, pero hay muchos problemas económicos”.

Además de apoyar estas iniciativas, los sectores sindicales vinculados al peronismo kirchnerista (Yasky, Baradel, Catalano de ATE, entre otros) se expresaron en contra del pacto entre la CGT, la UIA y el gobierno, por el cual se recorta 25% el salario de los trabajadores que están haciendo la cuarentena. Se pronunciaron también, formalmente, a favor de una recomposición salarial. Pero la pregunta es ¿qué están haciendo en concreto estos dirigentes para enfrentar el ajuste en curso? Nada, absolutamente nada.

Los dirigentes sindicales kirchneristas no enfrentan el ajuste

Son los campeones de inventar excusas. A la hora de salir a luchar la respuesta de estos dirigentes es siempre la misma: “No hay condiciones”. Muchos de ellos también nos dicen que movilizar contra este gobierno sería “hacerle el juego a la derecha”. Y ahora le suman “que no hay que romper la cuarentena”.

Comprendemos que haya compañeros que tengan expectativas en el gobierno, pero la verdad es que el motivo de fondo es que ambas supuestas “alas” son parte del gobierno peronista del Frente de Todos, y por ende llevan adelante todas sus políticas. Los dirigentes sindicales del peronismo kirchnerista se pintan “de progres”, pero es parte del doble discurso que aporta a que pase el ajuste.

Así, en la ciudad de Buenos Aires hace algunas semanas Larreta presentó un proyecto en la Legislatura para congelar los salarios

y la planta laboral. La “ley de emergencia” abrió además la puerta al pago escalonado de sueldos. Desde el gremio docente Ademys, junto con otros sectores y el acompañamiento de la izquierda, convocamos a movilizarnos. El peronismo kirchnerista no sólo estuvo ausente, sino que además boicoteó esta acción de lucha. La ley de Larreta, lamentablemente, se terminó votando a favor.

El gremio docente de la provincia de Buenos Aires atraviesa distintas problemáticas. Crecen los contagios de Covid-19 entre las maestras por estar expuestas cuando reparten bolsones de comida. Los suplentes no tienen ingresos porque no se realiza ningún acto público en el contexto de la pandemia. Frente a esta situación, desde la oposición de los Suteba multicolores se han realizado distintas acciones de lucha que fueron permanentemente atacadas por Baradel y la Celeste, que no movieron un dedo para solucionar los problemas de las y los docentes.

Algo similar pasó entre los estatales. A un gremio que tiene un gran retraso salarial el gobierno nacional le anunció que se postergan las paritarias por tiempo indefinido, ante lo cual las dos alas burocráticas que conducen ATE (los K de Catalano y los centroizquierdistas de Cachorro Godoy) no hicieron absolutamente nada.

La nota más saliente la dio un ministro de la Nación, Ginés González García, que atacó la jornada de protesta nacional del pasado 10 de junio de sectores de la salud señalando que “rompe el consenso político de trabajar todos juntos en la pandemia” y “expone a los más vulnerables”. Como bien le respondió nuestro compañero Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop, en una carta dirigida a su persona: “Sería bueno que se preocupara por solucionar estos y tantos otros problemas que venimos denunciando. Y si le molestan los reclamos públicos en cuarentena, su gobierno debería entonces destinar plata para la salud, los trabajadores y profesionales de los hospitales, para que haya una cuarentena sin rebajas salariales y jubilatorias”.

Como dijimos más arriba, la excusa favorita de los dirigentes sindicales del peronismo kirchnerista, la CGT y las CTA para no movilizar es que no es viable hacerlo en el marco de la cuarentena. Pero la realidad es que tampoco venían haciéndolo previamente. El año pasado, con Macri todavía en el gobierno, estos mismos sectores enarbolaban la consigna “hay 2019”, boicoteando las luchas y llamando a canalizar la bronca popular creciente por la vía electoral. Tal es así que el día que se votó el presupuesto anual a pedido del FMI, no asistieron a la movilización convocada en el Congreso. Fueron a una misa en Luján junto con Moyano y otros sectores. También en ese entonces dejaron pasar el ajuste,



subordinando todo al éxito electoral del peronismo.

Impulsemos la movilización y la organización contra el ajuste

Nuestro planteo es claro: estamos por una cuarentena sin hambre, y no queremos que sean los trabajadores los que paguen la crisis. Hoy el gobierno está descargando un fuerte ajuste sobre las espaldas de los trabajadores. Con los que “firman” ese pacto, la CGT, y con los que no hacen nada y la dejan pasar, los supuestos “progres” kirchneristas.

La realidad desmiente el planteo de que es inviable luchar en cuarentena. Son miles los trabajadores en el país que pelean contra las rebajas salariales, los despidos, las suspensiones y cierres de fábricas. Lo hacen aún cuando no tengan el acompañamiento de sus conducciones sindicales. Algunos se organizan mediante asambleas y haciendo acciones en sus propios lugares de trabajo o en las zonas aledañas, y otros se movilizan en las calles. La propia realidad y la gravísima crisis social que estamos atravesando los obliga a hacerlo. Para enfrentar el ajuste en curso, lejos de dejar las luchas libradas a su suerte, hay que darles todo el apoyo, fortalecerlas y coordinarlas para que ganen. Esto es lo que venimos haciendo desde el Plenario del Sindicalismo Combativo. Por eso nos postulamos como una conducción alternativa para la clase trabajadora: independiente del gobierno, democrática y combativa.

Por eso también decimos que, así como ambas alas peronistas se subordinan a las políticas del gobierno, de subsidiar a las patronales, pagar la deuda y, en definitiva, ajustar a costa del pueblo trabajador, si hay otra alternativa, la que planteamos desde el Frente de Izquierda Unidad: por una salida de fondo a los problemas del país. No pagar la deuda externa, imponer un verdadero impuesto a la riqueza, como lo expresa el proyecto que presentó el FIT en el Congreso, cuyo tratamiento fue rechazado con el voto de los diputados K incluidos, y que Vicentin sea expropiada sin indemnización y pase a ser 100% estatal y no una empresa mixta como sugiere el ala “izquierda” del gobierno.

Gran jornada nacional del sindicalismo combativo

Escribe **Javier Leonforte**

El martes 16 de Junio en más de 30 ciudades de todo el país se desarrollaron movilizaciones y actos impulsados por el Plenario del Sindicalismo Combativo para que la crisis no la paguemos los trabajadores.

Ciudades de Santa Cruz, Puerto Madryn (Chubut), Neuquén, Bariloche (Río Negro), Mendoza, San Juan, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Misiones, Entre Ríos, Rosario (Santa Fe), Córdoba, Bahía Blanca, Mar del Plata, San Nicolás, La Plata, Tigre, CABA, fueron algunos de los lugares donde la jornada nacional de lucha resuelta en el Plenario del Sindicalismo Combativo se hizo sentir con distintas acciones y reclamos obreros y populares bajo la cuarentena.

En Neuquén el sindicato ceramista encabezó la movilización y las fábricas recuperadas bajo gestión obrera pararon la producción para participar, junto a la minoría Multicolor del gremio docente ATEN, los camioneros del Expreso Argentino que están en conflicto contra los despidos, jóvenes repartidores precarizados y diferentes sectores sociales y políticos. Alejandro López y Angélica Lagunas fueron los principales oradores del acto. También hubo movilización en Cutral Co y otras localidades.

En Santa Cruz también hubo acciones en varias ciudades como Gregores, Caleta Oliva, o Pico Truncado y San Julián donde las combativas seccionales del gremio Adosac encabezaron la jornada en el marco del paro docente provincial. En Río Gallegos Adosac presentó en la Secretaría de Trabajo un reclamo a la gobernadora Alicia Kirchner por las paritarias y luego se marchó a la Municipalidad, donde se realizó el acto del PSC. Hablaron mineros de Río Turbio, trabajadores municipales y otros dirigentes sindicales como Apros de la Salud.

En Córdoba se marchó desde Colón y General Paz hasta el Patio Olmos, y se realizó un acto en pleno centro con casi 1.000 trabajadores. Estuvieron el Sutna y UTS (Salud), trabajadores de la agrupación Bordó 15 de Marzo del SEP (empleados públicos),

trabajadores de Luz y Fuerza, las agrupaciones Docentes en Marcha y Estatales en Marcha, trabajadores despedidos de Minetti, la adhesión del Plenario de Oposición Docente en UEPC y agrupaciones de jubilados. Se destacó la intervención de nuestro compañero Marcelo Benavidez de la 15 de Marzo, referente opositor al burócrata Pihen de la CGT.

En La Plata, luego de varias acciones de distintos conflictos por separado durante la cuarentena, la jornada del PSC logró articular por primera vez todas las luchas en curso en la región. Participaron los trabajadores de Vialidad provincial, Suteba Ensenada y la Multicolor de Suteba La Plata, trabajadores de la Salud, acompañantes terapéuticos, ATE Educación, de Producción y de Arba, entre otros sectores. Realizaron un acto frente a la gobernación donde habló nuestro compañero Amelio del Fabro.

En zona norte del conurbano bonaerense se realizó el acto del PSC cortando la ruta 197 a la altura de Panamericana, al frente de la Clínica El Talar. Allí una delegada de enfermería denunció que hay más de 20 trabajadores de la salud contagiados de coronavirus y que no tienen medidas de seguridad y al día siguiente fue despedida. Familiares de los enfermos y delegados llamaban a realizar el acto en la puerta de la Clínica, pero la patronal amenazó con nuevos despidos y colocó 20 patovicas para impedirlo. Participaron y hablaron dirigentes de Suteba Tigre, Foetra, Madygraf y estuvieron presentes también delegados del Hospital Mercante y otros luchadores de la zona. Cerró el acto nuestra compañera Isabel Guzmán.

El cierre nacional de la jornada de lucha se realizó con una conferencia de prensa en el Obelisco. Por la Mesa Nacional del PSC abrió el acto Alejandro Crespo del Sutna. En la mesa estaban los dirigentes de la Unión Ferroviaria Oeste, Cicop, Suteba Matanza, Ademys, Agd-Uba, ATE Ministerio de Economía, Hospital italiano y de las corrientes que integran el PSC. Nuestro diputado Juan Carlos Giordano, junto a Néstor Pitrola y Celeste Fierro, del FIT Unidad.

Destacada fue la presencia de una importante delegación de trabajadoras de La Nirva en conflicto de La Matanza, que tomaron la palabra. También hicieron un saludo el “MTR 12 de abril” en



nombre de los movimientos sociales presentes y Claudio Dellecarbonara del Subte, en nombre del MAC. Entre las delegaciones sindicales estaban la oposición de Foetra con los telefónicos de la Lista Roja, Docentes en Marcha, Estatales en Marcha y otros sectores. Y cerró la conferencia de prensa nuestro compañero Rubén “Pollo” Sobrero en nombre de la Unión Ferroviaria seccional Oeste, con una delegación de delegados del Sarmiento y la Bordó Nacional, encabezados por Mónica Schlotthauer. El Pollo saludó y reivindicó la gran jornada nacional del PSC en todo el país. Denunció que los gobiernos y las patronales quieren hacer que los trabajadores paguemos la crisis, profundizada por el coronavirus, con el pacto UIA-gobierno-CGT. Reafirmó que debemos levantar un programa alternativo, exigiendo un Fondo de Emergencia con fuertes impuestos a las grandes fortunas, multinacionales y banqueros y dejando de pagar la deuda externa. Para que esa plata vaya a atacar la pandemia, y a que la cuarentena sea sin hambre, con salarios, salud, trabajo y ayuda social para todos los que la necesitan. Y que, para lograrlo, hay que seguir impulsando la lucha, la coordinación y el apoyo a todos los que salen a pelear. Finalmente hizo un llamado a todos los presentes y a los luchadores de todo el país que aún no se hayan sumado, a unirse, a ampliar, fortalecer y desarrollar el Plenario del Sindicalismo Combativo. Así culminó una gran jornada de lucha.

Ante los “encuentros políticos sindicales” que impulsa el PTS/MAC - Fortalezcamos el Plenario del Sindicalismo Combativo

Escribe **Alejandro Waisma**

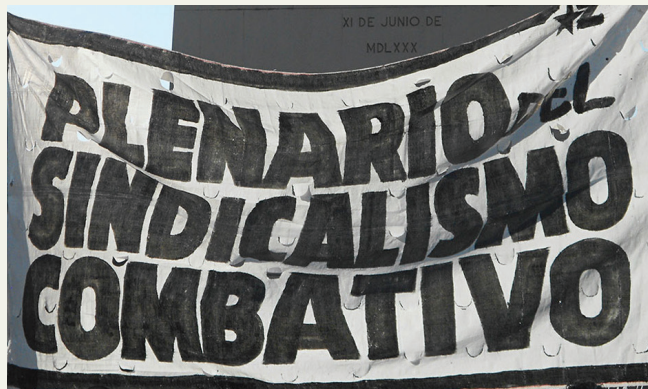
Luego de dos años de criticar al Plenario Sindical Combativo (PSC) y atacarlo públicamente, hace unas semanas el PTS/MAC solicitó su ingreso al Plenario del Sindicalismo Combativo. Después de una primera reunión se les solicitó que enviaran una carta a la mesa aclarando si su pedido era porque ya no consideraban que el PSC “era una coordinación proburocrática, que no practicaba la democracia y que no estaba a favor de la unidad de los trabajadores efectivos con los tercerizados y contratados”. Es que así, con difamaciones, el PTS/MAC calificaba al PSC y a dirigentes como el Pollo Sobrero, Angélica Lagunas, Alejandro Crespo, Jorge Adaro o Alejandro López, entre tantos otros dirigentes combativos y antiburocráticos reconocidos.

Después de nuestro exitoso plenario nacional virtual del 27 de mayo, el PTS/MAC envió una carta donde reivindica al PSC como “un frente y coordinación de dirigentes antiburocráticos”.

Este importante avance y cambio en su caracterización y política hubiera permitido una mayor unidad de los luchadores antiburocráticos. Pero tenía una gran contradicción, ya que al mismo tiempo comenzaron a realizar plenarios en todo el país para “conformar instancias lo más amplias posibles de discusión y organización de la vanguardia obrera y popular”. ¿Va el PTS/MAC a trabajar para integrarse y fortalecer el PSC o va a construir otro espacio diferente?

El 13 de junio se realizó en Córdoba uno de esos plenarios donde invitaron a dirigentes del FIT Unidad a dar un saludo, no así a dirigentes del PSC. Allí, entre otras cosas, planteó lo siguiente:

“Agradecemos la invitación a este plenario, que se da en el marco de una grave crisis económica mundial que ya viene desde el 2008. Y ahora el imperialismo, las patronales y los gobiernos del mundo están aprovechando la pandemia para



que la crisis la paguemos los trabajadores y pueblos del mundo, profundizando ese ajuste.

En ese marco, para nosotros es fundamental que los trabajadores logremos unificar y coordinar las luchas para enfrentar el ajuste de Fernández, los gobernadores, intendentes y las patronales. Que, si está logrando pasar, es porque tienen un gran aliado que es la burocracia sindical de la CGT y las CTA, que traicionan, aceptan las rebajas salariales y otras cosas que ya han nombrado quienes me precedieron.

Esta unidad debe profundizarse con un programa claro, que debe partir de que la crisis la paguen los empresarios, los grandes bancos, las multinacionales, no los trabajadores. Y que se deje de pagar la deuda externa.

Queremos hacer un debate fraternal, para nosotros ese embrión de coordinación ya existe. Ese programa ya existe. Es el que viene levantando desde hace ya dos años el PSC. Programa con el que coincidimos con los compañeros del PTS, porque es el mismo que levantamos con el FIT-Unidad.

El PSC viene dando la pelea por la coordinación de las luchas, expresada en diversos actos en apoyo a los conflictos, como haremos este 16 de junio en todo el país, en las cuales participarán los compañeros del PTS/MAC.

Para nosotros, la tarea de todo luchador no es construir nuevos espacios de coordinación sindical para ‘discutir y elaborar programas’. Al existir ya esa coordinación, y con dirigentes combativos reconocidos nacionalmente, impulsar una nueva coordinación diferente es, en los hechos, dividir lo que hay. ¡Hay que hacer lo contrario! Fortalecer la unidad y coordinación, sumar nuevos dirigentes, luchadores y agrupaciones al PSC para que se pueda seguir desarrollando, y en algún momento pegar el salto al calor de las luchas, que seguirán creciendo. Que ese espacio existe quedó demostrado el 27 de junio en el plenario virtual del PSC, que fue un éxito.

Desde Izquierda Socialista nos alegra enormemente que los compañeros hayan cambiado su visión equivocada sobre el PSC y hayan pedido su ingreso después de dos años donde se negaron a ingresar. Por eso nosotros vamos a proponer a la mesa del PSC que se acepte el ingreso de los compañeros del PTS/MAC, hasta un nuevo plenario nacional con presencia física.

Pero insistimos en que es contradictorio proponer realizar estas reuniones por fuera del PSC. Les propongo que esta reunión apruebe el ingreso del PTS/MAC al PSC, evitando un nuevo divisionismo que en nada va a fortalecer la unidad de las luchas. Y, en ese camino, también evitar que se repitan graves errores, como formar listas de oposición en sindicatos con direcciones combativas, que debilita las nuevas direcciones, lleva a retrocesos y derrotas, como ocurrió en ATEN Neuquén, que su divisionismo permitió que la Celeste recuperara ese sindicato democrático y combativo. No se puede volver a formar listas opositoras a la Bordó del Pollo en ferroviarios, o contra la Negra de Alejandro Crespo en el Sutna. Estas cosas no ayudan al desarrollo del sindicalismo combativo, que tiene que tener el norte de fortalecerse, pese a las diferencias, porque estamos juntos en las calles. Compañeros, nos vemos este 16 en la Jornada Nacional del Sindicalismo Combativo. Muchas gracias”.

El MST rompe acuerdos y actúa debilitando al PSC

Escribe **Guillermo Sánchez Porta**

La Mesa del Plenario del Sindicalismo Combativo de AMBA decidió no realizar una gran marcha del Obelisco a Plaza de Mayo. Sino hacer una Conferencia de Prensa en el Obelisco, cuidando mucho el distanciamiento social, con una cantidad acotada de compañeros de cada sindicato, movimientos sociales, agrupaciones y partidos que apoyan. Tomando las resoluciones del plenario virtual del 27 de mayo, de adecuar las acciones del 16 de junio según como estuviera en cada ciudad la pandemia y la cuarentena.

La situación de la pandemia se agudizó en el AMBA, epicentro del coronavirus en el país. Los compañeros de la CSC/PO coincidieron con lo que habíamos planteado desde la corriente sindical de Izquierda Socialista, sobre la opinión de los sindicatos ferroviarios, docentes, estatales y otros sectores donde actuamos y consultamos permanentemente.

La CSC/PO dijo que también en AGD-UBA y el Sutna, que venía de un fuerte paro por casos de coronavirus, consideraban que movilizar masivamente sería perjudicial para sus reclamos y debilitar su lucha. Esto lo reafirmaron otras corrientes del PSC.

Lamentablemente el MST consideró que este cambio implicaba “capitular a las maniobras del gobierno, a la burocracia y el kirchnerismo”, acusaciones inaceptables. Y absurdas, pues todos estamos en duras peleas sindicales contra las burocracias de la CGT y las CTA y, además, estaríamos juntos el 16 en la jornada nacional de lucha. Por respetar las resoluciones del Plenario y las opiniones de los trabajadores de los sindicatos que integran el PSC, el MST nos acusó de “capituladores”. Finalmente, realizamos las dos últimas

reuniones para organizar la jornada en CABA y el MST aceptó todos los acuerdos de la conferencia de prensa en el Obelisco, sólo dejando en claro que no compartía los criterios de la actividad.

Grande fue nuestra sorpresa cuando, a las pocas horas, el MST sacó un comunicado convocando a otro acto propio, frente a la UIA, a cuatro cuadras del Obelisco, una hora antes, supuestamente “en el marco de la jornada del PSC”. Además de un grave error político, fue un hecho desleal, sin siquiera plantearlo en las reuniones. Luego lo justificaron diciendo que “los compañeros del MST estaban preparados para marchar y no quisieron levantar”.

Lamentablemente los dirigentes del MST vuelven a priorizar criterios y objetivos propios, por encima de los acuerdos y consensos del PSC, sin interesarles las opiniones de los trabajadores. Y, muy grave, realizaron una acción contraria al PSC, que lo debilitó, generó problemas en algunos de los sindicatos que lo integran y malestar entre sus dirigentes.

Fue una acción con el objetivo “mediático” de salir en la TV engañando como que “la jornada de lucha” en CABA era la suya, lográndolo parcialmente ya que, por ejemplo, TN fue a su acto y no a la conferencia de prensa del PSC. Y también intentaron instalar que “el MST no se asusta y los otros sí”. Esta ruptura de los acuerdos crea un grave precedente que mina la confianza entre quienes fundamos y construimos el PSC, con un nuevo criterio equivocado de que “los acuerdos se pueden cumplir o no”. Además, en todo el AMBA mantuvieron esa actitud divisionista. En Tigre, los trabajadores de la Clínica El Talar nos pidieron no



hacer el acto en la puerta por las presiones de la patronal, pedido que obviamente todos acatamos. Salvo el MST, que se quedó allí hasta que empezó el acto y publicó fotos diciendo que “ese” era el acto del PSC, en la puerta de la Clínica. En el acto conjunto en La Plata, en su intervención se dedicaron a criticar la Conferencia de Prensa del PSC en CABA. ¡Increíble!

Llamamos a los compañeros del MST y a su dirigencia a que reflexionen sobre estas actitudes, que sólo pueden generar malestar dentro del PSC y debilitarlo. Debemos respetar las opiniones y decisiones de los sindicatos que integramos el PSC y buscar consensos entre todos, para seguir fortaleciendo la unidad y la lucha.

Así buscamos actuar en el PSC, que contiene sindicatos, comisiones internas, corrientes, dirigentes y movimientos sociales, que tenemos diferentes ritmos de lucha y de mecanismos para resolver, y ya es una organización de carácter nacional, que también debe considerar las especificidades de cada provincia, gremio y lugar.

No se puede actuar caprichosamente y en forma individual en la lucha de clases, porque eso atenta contra la unidad, la confianza, la coordinación y el desarrollo del PSC

NOTICIERO SINDICAL

El Pollo Sobrero y Jorge Adaro visitaron La Nirva

Los trabajadores de La Nirva continúan en estado de asamblea permanente reclamando los ocho meses de salarios que les adeuda la empresa y la continuidad de su fuente de trabajo frente al abandono de la patronal.

El miércoles pasado, Rubén Pollo Sobrero y Jorge Adaro se acercaron a llevar la solidaridad de los ferroviarios de la Seccional Oeste y los docentes de CABA nucleados en Ademys. También estuvieron presentes Olga Ortigoza, de la comisión directiva del Suteba La Matanza, sindicato que viene acompañando la pelea de las compañeras y compañeros desde el primer día, y una delegación de compañeras y compañeros de Izquierda Socialista de ese distrito.

Durante aproximadamente una hora nos reunimos con los compañeros, intercambiando las experiencias de lucha de los distintos gremios, reflexionando acerca de la trascendencia de coordinar las peleas de quienes se organizan por fuera de la burocracia sindical en el Plenario del Sindicalismo Combativo y la importancia de acompañar la lucha sindical con las peleas políticas de fondo, como propone el Frente de Izquierda Unidad. La reunión se desarrolló en un clima muy ameno, de camaradería. Desde Izquierda Socialista redoblamos nuestro compromiso solidario con esta heroica y ejemplar pelea hasta que gane.

Al finalizar la reunión, Sobrero declaró: “La situación que están viviendo las compañeras y compañeros de La Nirva se repite a lo largo y ancho del país. Por eso los vinimos a apoyar y a convocar para que sean parte de la jornada nacional de lucha del 16 de junio convocada por el sindicalismo combativo. No puede ser que la crisis del coronavirus la estén pagando los trabajadores. La CGT pactó una rebaja salarial con los empresarios y el gobierno y siguen los despidos y las suspensiones. Exigimos un inmediato fondo de emergencia a partir de un impuesto a los grandes empresarios, bancos y multinacionales y que se deje de pagar la deuda externa para volcar esos fondos de manera urgente a la emergencia”.

Jornada de lucha de los trabajadores de la salud

El pasado 10 de junio la Cicop, junto con otras organizaciones gremiales y asociaciones de profesionales de la salud de CABA y la provincia de Buenos Aires, realizaron una jornada de lucha por la salud pública. En medio del creciente número de contagios entre



el personal de la salud, desde las 10 de la mañana los hospitales del conurbano y CABA fueron epicentro de diversas acciones, aplausos, suelta de globos y recorridas, respetando un estricto distanciamiento social y medidas de prevención en medio de la pandemia. A las 12, delegaciones de CABA y la Cicop confluyeron en el Obelisco y, mediante una radio abierta, difundieron la problemática de la salud, reclamando la dotación de elementos de protección de calidad y en cantidad, que se les pague el bono de 5.000 pesos, paritarias y aumento de personal. Allí recibieron el acompañamiento y la solidaridad de diversas organizaciones, entre ellas, nuestro partido Izquierda Socialista, que dio un saludo en la palabra del diputado nacional electo Juan Carlos Giordano. El balance de la jornada fue positivo porque fortaleció a los trabajadores de la salud, que hicieron un gran esfuerzo para movilizar respetando todas las medidas de distanciamiento social necesarias para terminar una jornada de lucha muy importante.

Paro del Sutna por condiciones de salubridad

El paro en Fate, Bridgestone y Pirelli convocado por la combativa conducción del Sutna fue total. Una respuesta generada por los casos de los trabajadores del neumático contagiados con Covid-19 en esas plantas ante la despreocupación de las patronales para instaurar el protocolo de higiene y seguridad elaborado por la conducción sindical. Desde el sindicato denunciaron que las patronales tampoco han procedido a aislar a aquellos trabajadores que estuvieron en contacto con los compañeros infectados. En un comunicado, el Sutna reiteró la necesidad que las patronales cumplan y mejoren las condiciones de salubridad en el trabajo para evitar nuevos contagios.

Cinco Hispanos en lucha

Los trabajadores de Cinco Hispanos, ubicada en La Matanza, que fabrica café y los snacks Krachitos, se encuentran adoptando medidas de lucha debido a que la patronal abonó solamente el 50% del sueldo durante abril y mayo, pese a que es una empresa del rubro alimentario que continuó trabajando en sus tres turnos durante toda la cuarentena, por lo que es considerada una empresa “esencial” que, además, tiene superávit con la venta de sus productos.

Los trescientos trabajadores de la planta de Ramos Mejía, nucleados en el gremio de la Alimentación, iniciaron un paro el viernes y siguieron hasta el lunes, día en que también se plegaron a la medida de fuerza los cien trabajadores de la planta de La Tablada.

Los compañeros reclaman que se les abone el 100% de sus salarios y el aguinaldo en un solo pago, ya que la patronal amenaza con pagarlo en cuotas. Todo nuestro apoyo a los compañeros de Cinco Hispanos.

Neuquén. Camioneros siguen firmes y en pie de lucha

Continúa el campamento de los doce trabajadores suspendidos de la empresa Expreso Argentino bloqueando las puertas del depósito y evitando que lo vacíen mientras exigen que les paguen los tres meses de salarios adeudados y los reinserten en el trabajo, ya que la empresa continúa trabajando en otros depósitos y con choferes precarizados y en negro. El sindicalismo combativo, la izquierda y organizaciones sociales, nucleados en la Multisectorial en Apoyo a las Luchas, acompañamos a los trabajadores en la importante movilización realizada el viernes 12 exigiendo que la Secretaría de Trabajo intime a la empresa a elevar una propuesta para solucionar el reclamo mientras la Justicia insiste con una orden de desalojo de los portones en lugar de obligar a los patronos a pagar lo adeudado. Junto con la gran solidaridad que ha despertado el conflicto, con aportes de alimentos y fondos para que puedan continuar la lucha, este martes 16 los camioneros se sumaron a la gran movilización y acto organizados por el sindicalismo combativo y la Multisectorial. Esto fortalece el aguante de los camioneros ya que la unificación de las acciones con otros sectores en lucha, como los ceramistas, los docentes y los desocupados, está dando mucha visibilidad al reclamo y generando un estado de movilización muy activo que les permite mantenerse firmes en sus exigencias por el salario y la continuidad laboral.

A dos años del 13J: #AbortoLegalYa

Escribe **Mercedes Trimarchi**, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista en el FIT/ Unidad

El pasado 13 de junio se cumplieron dos años de la media sanción al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Recordamos con mucha emoción aquella jornada de lucha por el aborto legal en la que estuvimos frente al Congreso con temperaturas bajo cero durante más de veinte horas. Sin embargo, esa alegría nos duró menos de dos meses, porque el 8 de agosto de ese mismo año senadores peronistas, radicales, kirchneristas y de Cambiemos votaron en contra, votaron para que continúe el aborto clandestino, uniéndose con los sectores eclesiásticos más reaccionarios y conservadores en una fuerte cruzada contra las mujeres y disidencias. A dos años de aquella jornada histórica seguimos reclamando que el aborto #SeaLey.

En la Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, 1.300 por día, entre 370.000 y 520.000 al año. El aborto es una realidad y un problema de salud pública; que no se le dé prioridad a esta problemática es responsabilidad del gobierno. Los abortos inseguros causan graves secuelas físicas en los cuerpos gestantes: hemorragias, infecciones, peritonitis, rotura uterina, lesiones en vagina y útero, infertilidad, entre otras. La muerte es la consecuencia más extrema y no es casualidad que quienes la sufren sean las personas más pobres que no tienen posibilidad de acceder a un aborto con los cuidados necesarios.

Un informe elaborado por el portal feminista Latfem, en colaboración con Amnistía Internacional, denominado “Sin ley: zona de riesgo”, relata la historia de las catorce mujeres y niñas que murieron por abortos inseguros desde que el Senado dijo que no a la legalización del aborto voluntario. Los datos fueron recolectados de los casos que fueron noticia en los medios de comunicación, ya que no hay registros actualizados que den



cuenta de estas situaciones, que seguramente son más, pero la clandestinidad no permite que se lleve un registro exhaustivo. Seis mujeres del conurbano bonaerense, tres santiagueñas, una niña wichi de Chaco y otra niña salteña, una joven de 22 años en Formosa y una madre de dos hijos pequeños en Catamarca. Todas muertes evitables.

Alberto Fernández mira para otro lado

El presidente se pronunció en varias oportunidades a favor de la legalización del aborto y anunció el 1° de marzo que enviaría un proyecto propio distinto del de la Campaña Nacional. Pero, fiel a su doble discurso, hasta el momento no lo dio a conocer y, según sus declaraciones, su proyecto fue consensuado con los “celestes”, en referencia al color del pañuelo de quienes se oponen a la legalización del aborto voluntario. Luego vino el aislamiento preventivo obligatorio, el Congreso comenzó a

funcionar virtualmente y hasta el momento nada.

Llamativamente, en vísperas del 3J, que conmemora el #NiUnaMenos, Alberto Fernández fue entrevistado en Radio Metro y al ser consultado por el tema reconoció que no se tratará en el corto plazo, alegando que tiene “otras urgencias que van desde la pandemia hasta la deuda externa”. Pero insistimos, el aborto es un problema de salud pública y en este contexto debería ser prioritario, ya que hasta el acceso a las interrupciones legales de los embarazos (ILE) presentan todo tipo de dificultades que van desde la falta de información hasta la demora en la atención, entre otras.

Que se apruebe el proyecto de la campaña

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y gratuito está integrada por más de setecientas organizaciones políticas, sociales, culturales, de derechos humanos, etcétera. El año pasado presentó por octava vez en el Congreso el proyecto de ley que fue elaborado por el movimiento feminista y recoge los aportes del debate parlamentario de 2018. En su texto se establece la gratuidad de la práctica y que la sola decisión de la mujer o persona gestante baste para que se le garantice la interrupción del embarazo de manera gratuita, hasta la semana catorce. Este es el proyecto de la #MareaVerde y tiene estado parlamentario, es decir que se podría votar ahora si hubiera voluntad política para hacerlo. Por eso exigimos que se apruebe inmediatamente el proyecto de ley de la Campaña, sin dilaciones y sin concesiones a las iglesias y sectores conservadores que se interponen a nuestras necesidades urgentes e imperiosas. A dos años de aquella jornada histórica seguimos gritando #AbortoLegalYa.

DEBATE

El PCR/CCC rompe con el EMVJ

Escribe **Nicolás Nuñez**, legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El pasado 9 de junio Liberpueblo, el organismo de derechos humanos impulsado por el Partido Comunista Revolucionario, hizo pública su definición de romper con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ). Lo hizo a través de una carta donde tergiversa la trayectoria reciente del espacio.

El EMVJ se creó al cumplirse veinte años del inicio de la dictadura cívico-militar y, desde ahí en adelante, se constituyó en una referencia no solo para las masivas convocatorias de cada 24 de marzo, sino también en la pelea en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad. Fue este espacio el que levantó reclamos importantísimos, como el de la aparición con vida de Julio López y de Luciano Arruga, durante los gobiernos kirchneristas; el repudio a la designación del genocida César Milani a cargo del Ejército, y sostiene, además, una militancia firme y constante para que avancen los juicios contra los milicos superando las trabas que ponen la Justicia y los gobiernos.

Asumido el gobierno de Alberto Fernández, esta orientación de lucha independiente chocaba naturalmente con la nueva ubicación que asumió el PCR al incorporarse al Frente de Todos, primero, y al gobierno nacional, después. Para muestra, basta ver la página oficial de Liberpueblo, donde no hay ninguna mención al ciberpatrullaje, a la desaparición y asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, a la golpiza y abusos que sufrió la comunidad Qom en Chaco, al espionaje a los mineros de Andacollo en Neuquén ni a la represión de los trabajadores del frigorífico Penta. ¿Cambió el EMVJ como dice el PCR en su comunicado? ¿O más bien cambió el PCR, que ahora tiene funcionarios gubernamentales y diputados y oculta la represión del gobierno nacional y los gobiernos provinciales? La realidad es clara.

El EMVJ ante Macri

El centro del razonamiento del PCR es que durante el gobierno de Macri el EMVJ se achicó y se hizo más sectario. Para eso se vale de argumentos como que se retiraron organizaciones y que el Encuentro no habría señalado ni compren-

dido la verdadera gravedad que tuvo la represión durante el gobierno de Cambiemos. Veamos.

Es cierto que algunas organizaciones se retiraron del Encuentro en ese período, pero fueron aquellas que, como Patria Grande, se adelantaron al PCR en su incorporación al kirchnerismo y, por lo tanto, era natural que se separen de un espacio que mantiene independencia de todos los gobiernos. En contraposición, en este período terminaron de cristalizarse dentro del EMVJ otras organizaciones importantes, como el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), de Pérez Esquivel.

A su vez, que el EMVJ no tuvo una posición sectaria lo demuestra el impulso de unidad de acción con organismos kirchneristas para enfrentar el otorgamiento del 2x1 a los genocidas, o para movilizarse una y otra vez acompañando a la familia de Santiago Maldonado. Al calor de esas peleas, el EMVJ llegó a definir en sus documentos que Cambiemos impulsaba un agravamiento cualitativo en la situación represiva y el intento de fortalecer el aparato represivo del Estado. Por eso, cada declaración tuvo como centro la denuncia del accionar del gobierno nacional. De hecho, en las consignas del 24 de marzo de 2019 el PCR vetó denunciar a los gobernadores provinciales que reprimían y se terminó consensuando, para mantener la unidad, la fórmula elíptica de denunciar a los “cómplices de Macri”. No hubo ninguna imposición sectaria ni política rupturista ni búsqueda de “uniformidad política”, como miente el PCR.

Una ruptura que es una nueva capitulación

Es real, como dice el texto de Liberpueblo, que en los últimos años se agudizaron los debates dentro del EMVJ. Pero esto no se debió a una transformación sectaria, sino al giro político properonista que fue tomando el PCR. El razonamiento de este partido maoísta tiene el mismo error de método



de alguien que, arriba de un tren en movimiento, piensa que es el paisaje que ve por la ventana lo que se mueve y no el propio tren. El Encuentro sigue firme en sus principios de lucha, quien se desplaza es la locomotora de capitulaciones del PCR, que tiene una larga trayectoria en esa dirección.

Desde su apoyo al gobierno de Isabel Perón en los tiempos de la Triple A a su activa militancia a favor del triunfo de Carlos Menem, hasta su acercamiento al gobierno de Néstor Kirchner para luego hacerse “anti-K” y hacer acuerdos con Francisco De Narváez. Y ahora su retorno al redil del peronismo da cuenta de la “elasticidad” de esta organización que se dice comunista y revolucionaria. La premisa maoísta de que hay que buscar un sector burgués nacional progresivo lo ha llevado a chocar una y otra vez contra la pared, pero jamás a revisar sus preceptos.

Rechazamos los ataques y las mentiras de quienes quieren encubrir una nueva capitulación. Defendemos la trayectoria y el presente de lucha independiente de todos los gobiernos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Sostenemos que tiene y tendrá un lugar importantísimo en la lucha por frenar la represión que obligadamente intentará aplicar el gobierno de Fernández para hacer pasar el ajuste. Así como también en la pelea por lograr que los genocidas vayan presos y terminar de una vez con la impunidad de ayer y de hoy.

El gobierno peronista de 1973 a 1976

Escribe **Adolfo Santos**

El período transcurrido entre 1973 y 1976 fue uno de los más convulsionados de la historia política reciente de nuestro país. Dos importantes hechos marcaron aquel momento. Por un lado, el gran ascenso iniciado con el Cordobazo, que en la primera mitad de los años '70 adquirió una fuerza extraordinaria. Por otro, el fin de ese proceso con la derrota de la clase trabajadora a manos del más sangriento golpe militar sufrido en nuestro país. En esos cuatro años se sucedieron cuatro gobiernos, el de Héctor J. Cámpora, el de Raúl Lastiri (asumió de forma provisional), el de Juan Domingo Perón y el de María Estela Martínez de Perón. Todos ellos gobernaron con el objetivo de cerrar el proceso abierto con el Cordobazo. En ese cortísimo espacio de tiempo amplios sectores de masas pasaron de la euforia por reinstalar un gobierno peronista después de años de proscripción, a la necesidad de tener que enfrentarlo con grandes huelgas y movilizaciones. En ese desarrollo vertiginoso y conflictivo, en el que sectores importantes de la dirigencia peronista enfrentaron desde el gobierno a los trabajadores y sus demandas, se fue incubando el golpe contrarrevolucionario de marzo de 1976 que, finalmente, cerró la etapa abierta con el Cordobazo.

La lucha de clases acaba con la dictadura

Desgastada y acorralada por las luchas, la autodenominada Revolución Argentina, que en 1966 llegó anunciando “tenemos objetivos pero no tenemos plazos”, fue perdiendo fuerzas. Acosada por conflictos e insurrecciones obreras, estudiantiles y populares, su último representante, el general Alejandro Agustín Lanusse, no tuvo más remedio que rehabilitar a los partidos políticos y negociar con los principales líderes burgueses, fundamentalmente con Perón, desde su exilio en Madrid, y con Ricardo Balbín, de la UCR, la convocatoria a elecciones para canalizar el ascenso. Como parte de este acuerdo, después de muchos años, se levantó la proscripción al peronismo, aunque con una maniobra leguleya (solo podían ser candidatos los residentes en el país hasta antes del 25 de agosto de 1972) se impidió la postulación de Perón.

Cámpora al gobierno, Perón al poder

El peronismo debía actuar como dique de contención de las crecientes luchas que habían comenzado a generar nuevas direcciones antiburocráticas, clasistas e independientes, cuya dinámica colocaba en peligro el sistema vigente. Sin embargo, como quedó demostrado en el período posterior a la asunción del gobierno, era evidente que la fórmula presidencial encabezada por Cámpora y el conservador Solano Lima no tenía la autoridad suficiente para controlar el proceso. Se necesitaba una dirección de verdad, algo que solo se podía conseguir con la intervención directa del general Perón. De alguna manera, los sectores que impulsaron la consigna Cámpora al gobierno Perón al poder, formulada en el lanzamiento de la campaña del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) en el mes de enero, estaban materializando esa necesidad, como quedó demostrado en la breve “primavera camporista” iniciada el 25 de mayo.

En la medida que los trabajadores veían el triunfo electoral como propio y se sentían con el derecho de exigir nuevas demandas, las movilizaciones no paraban de crecer. En la noche del mismo día 25 de mayo miles de personas rodearon la cárcel de Devoto exigiendo la libertad de los presos políticos. En apenas unas horas casi quinientos presos, muchos de ellos dirigentes de organizaciones guerrilleras, fueron liberados de las cárceles de Devoto, Rawson, Caseros, La Plata, Tucumán y Córdoba, algo que con una “ley de amnistía”, como proponían los políticos, hubiera demorado meses. Una gran ola de conflictos por reivindicaciones largamente postergadas, exigiendo la reincorporación de los despedidos durante la dictadura y por cuestiones democráticas y económicas, se extendió como reguero de pólvora. Las huelgas con ocupaciones de fábrica, muchas veces con miembros de la patronal como rehenes, se



convirtieron en moneda corriente. La zona norte del Gran Buenos Aires, donde se habían instalado centenas de fábricas, fue la vanguardia de este proceso. Las metalúrgicas Ema, Wobron y Tensa, Editorial Abril, las ceramistas Lozadur y Cattaneo, los astilleros Astarsa, fideos Matarazzo, DPH y Panam, del plástico, entre otras, fueron protagonistas de la efervescencia obrera de ese momento y generaron una nueva vanguardia que le disputaba espacios a la burocracia sindical.

Impotente frente al ascenso, Cámpora renuncia

Apenas habían pasado cuarenta y nueve días cuando Cámpora, débil para detener el ascenso, fue obligado a renunciar el 13 de julio para abrirle camino a Perón, el único dirigente con autoridad para intentar frenar las luchas. El golpe palaciego que destituyó a Cámpora instaló a Raúl Lastiri, un desconocido de las mayorías, del entorno de Isabel Perón y yerno de López Rega, que asumió interinamente la presidencia. El Pacto Social, un proyecto de conciliación de clases impulsado desde el gobierno de Cámpora, no conseguía cumplir su cometido. El proyecto, ideado por el ministro de Economía José Ber Gelbard –dirigente de la Confederación General Económica, donde se nucleaba el empresariado nacional–, que centralmente apuntaba al control de los salarios, fue firmado el 8 de junio por la CGT encabezada por José Rucci. Sin embargo, las luchas no se detenían y los burócratas sindicales empezaron a ser desbordados por un nuevo activismo.

El regreso del líder, un viejo anhelo del pueblo trabajador argentino, fue una primera demostración de cómo serían las cosas en adelante. El 20 de junio, cerca de un millón de personas se dirigieron a Ezeiza para recibir al general que volvía del exilio. Preocupados por que las corrientes de izquierda, como la JP y Montoneros, le robaran la escena, como había acontecido el 25 de mayo con la liberación de los presos, la burocracia sindical y el aparato del Partido Justicialista, bajo la “conducción” del ministro de Bienestar Social, José López Rega, armaron un escenario de guerra. Para impedir que la multitud se acerque a Perón la derecha peronista montó un cerco frente al palco y comenzó a disparar a mansalva. El resultado oficial de esa “batalla” fue de trece muertos, 365 heridos y decenas de presos y torturados. Testigos aseguran que los muertos fueron muchos más.

Septiembre de 1973: Perón es presidente por tercera vez

Con Perón en la Argentina, el aparato peronista se empezó a preparar para acabar con la “primavera camporista” y comenzar a controlar la situación. Después de lo de Ezeiza, Perón, que ya había adjudicado a los trotskistas la responsabilidad de la liberación de los presos, dirigió un mensaje al país para mostrar que había tomado las riendas. “Los peronistas tenemos que retomar la conducción de nuestro movimiento”, dijo, y volvió a embestir contra los “infiltrados” y los “enemigos embozados y encubiertos a los que había que combatir”. Un claro mensaje contra la izquierda. Sin embargo, tanto las FAR como Montoneros defendían la tesis de que Perón estaba cercado por las fuerzas de derecha proimperialistas comandadas por López Rega y la burocracia sindical, lo que le impediría “dialogar con su pueblo”. Negaban una realidad palpable, el robuste-

cimiento de los sectores de derecha y más reaccionarios a la hora de la toma de decisiones del gobierno peronista. Y, peor, apuntalados por el propio Perón.

Desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) respondimos a ese argumento denunciando que los grupos de derecha que atacaron en Ezeiza, cuando llegó Perón, pretendían organizarse de forma permanente para reprimir a toda la izquierda, peronista y no peronista. Dábamos como ejemplo los ataques sufridos en la fábrica Citroën, en SIAT, o en la construcción en Córdoba, entre otros. Estaba instalada la batalla entre las aspiraciones de cambios sociales y el avance de conquistas manifestadas en las luchas obreras, populares y estudiantiles, fogueadas por las nuevas direcciones, y el aparato peronista instalado en el gobierno, junto

a la burocracia sindical, bajo el liderazgo de Perón. Frente a esta situación, nuestro partido tuvo una política permanente de coordinar las luchas en curso para fortalecerlas y para poder resguardar de esos ataques a la nueva vanguardia.

El 23 de septiembre se realizaron nuevas elecciones presidenciales. La fórmula Perón-Perón (con Isabel como vice) ganó ampliamente. El imperialismo, los grandes y medianos empresarios, sectores de la oligarquía, las fuerzas armadas, la burocracia sindical y la Iglesia cerraron filas detrás del general con la esperanza de que pusiera fin al “caos social” imperante y estabilice la situación. Como se sabe, Perón ganó holgadamente en la primera vuelta. Contradictoriamente, el amplio triunfo obtenido con el apoyo de las masas iba en la dirección de consolidar el proyecto de fondo: derrotar al movimiento obrero, que venía en ascenso desde el Cordobazo.

Coral-Páez, una alternativa obrera y socialista

El PST, que era parte importante de la vanguardia que participaba de ese proceso, interviniendo en las luchas, era también la única corriente de izquierda que daba la pelea electoral con una política de independencia de clase. Como lo había hecho en las elecciones de marzo, en septiembre también convocó al clasismo surgido de las luchas del Cordobazo para dar juntos esa batalla. Con la consigna “Contra Manrique, Balbín, Perón, la izquierda debe votar unida”, una vez más le propuso a las principales figuras de ese proceso, como Tosco, Salamanca y Jaime, dirigente del peronismo revolucionario, encabezar la fórmula utilizando la legalidad del PST. Lamentablemente, una parte de esos sectores acabó votando a Perón y otra mantuvo una actitud sectaria y abstencionista llamando al voto en blanco. El PST presentó una fórmula encabezada por el dirigente socialista Juan Carlos Coral, acompañado por uno de los más importantes dirigentes del clasismo cordobés, el compañero José Francisco Páez. Los casi 200.000 votos obtenidos por el partido, a pesar de las dificultades económicas y el vacío de la prensa burguesa, demostraron el acierto de esa participación. Esos miles de compañeros, muchos de ellos activistas y dirigentes clasistas, habían asumido la propuesta de dar continuidad a las luchas fabriles, barriales y estudiantiles contra la conciliación de clases y el Pacto Social en el terreno electoral.

El tercer gobierno de Perón

El 12 de octubre de 1973 Perón asume su tercer mandato presidencial, que duró apenas nueve meses, hasta su muerte, el 1° de julio de 1974. A pesar del barniz de izquierda que la Juventud Peronista le quería imprimir a Perón, el general los descolocaba a cada paso. Para comprobar lo que decimos basta ver su visión: “Yo siempre he tenido mucha más fe en los hombres de empresa, que son los que han demostrado que saben hacerlo. El país, como negocio, es un gran negocio individual amplificado, de manera que el que es capaz de manejar un gran negocio, a este otro gran negocio puede también manejarlo”. Quien quiera entender...

Desde el comando, Perón reafirmaba la tarea que había comenzado a ejecutar desde su llegada el 20 de junio, derrotar el ascenso de la clase trabajadora sirviendo a las exigencias de la burguesía, las multinacionales y el imperialismo. Los meses siguientes fueron turbulentos. La luchas continuaban, pero

El gobierno peronista de 1973 a 1976

las organizaciones guerrilleras, con sus atentados y acciones ajenas a las necesidades de la clase trabajadora, generaban mucha confusión y le daban pretexto a los grupos de la lopez-reguista instalados dentro del propio gobierno peronista y a la burocracia sindical para avanzar con leyes represivas y ataques cada vez más truculentos. El fracasado asalto al Comando de Sanidad del Ejército el 6 de septiembre de 1973 organizado por el ERP, el asesinato de José Rucci por los Montoneros dos días después del triunfo de Perón, o el ataque al Regimiento de Caballería de Azul por parte del PRT/ERP el 19 de enero de 1974, entre otras acciones, favorecieron el proyecto de reprimir a los sectores de vanguardia, y en particular al movimiento obrero y entorpecieron las luchas en curso por nuevas conquistas, contra la burocracia sindical y el congelamiento salarial impuesto por el Pacto Social.

Luego de la acción guerrillera contra el cuartel militar de Azul se tomaron dos medidas. Una que afectaba a los propios sectores de la denominada izquierda peronista, la renuncia de Oscar Bidegain, gobernador de Buenos Aires, que le abrió el camino a su vice, el burócrata Victorio Calabró, dirigente metalúrgico de la zona norte, organizador de las patotas que atacaban activistas y que luego se complementaron con sectores militares en la conformación de la tristemente célebre Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). El otro hecho afectó al movimiento de masas y sus luchas, el gobierno envió al Congreso la reforma del Código Penal y nombró a dos conocidos represores al frente de la Policía Federal, Alberto Villar y Luis Margaride.

En 1974 las bandas de ultraderecha comenzaron a realizar atentados contra locales y militantes de la JP, el PC y el PST. El 29 de enero, la Triple A difundió una larga lista de personalidades a ejecutar. Entre los primeros figuraba nuestro dirigente, Nahuel Moreno. Se allanaron librerías, se intervino la provincia de Córdoba, se atacaron avances democráticos conquistados por el sindicalismo clasista y se aplicó la Ley de Prescindibilidad, con la cual descabezaron la combativa dirección sindical del Banco Nación. Durante el acto del 1° de mayo Perón expulsó públicamente de la Plaza a los Montoneros, lo que les significó un gran golpe y los llevó a profundizar sus errores, pasando a la clandestinidad, radicalizando sus métodos y aislándose cada vez más del movimiento de masas.

La masacre de Pacheco

En ese marco de ataques de las bandas reaccionarias de derecha, se produce el asesinato de cuatro militantes del PST. El 7 de mayo fue asesinado el compañero Inocencio “Indio” Fernández, delegado de la fundición Cormasa e integrante de la Lista Gris de oposición a la burocracia metalúrgica de Calabró/Minguito. El 29 de ese mes, una banda armada de unos quince matones invadió el local del partido en General Pacheco, secuestró seis compañeros y, luego de liberar a tres compañeras, en un descampado entre Pilar y Tortuguitas ejecutó, con decenas de tiros, a los compañeros Oscar “Hijitus” Mesa, delegado de Astarsa, Mario “Tano” Zidda, dirigente estudiantil, y Antonio “Tony” Moses, obrero de Wobron. No fueron los únicos. Activistas de otras organizaciones de izquierda también fueron asesinados salvajemente en esos días.

El PST denunció claramente a esa organización fascista como parte integrante del gobierno peronista y convocó a un gran acto unitario. Decenas de dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles adhirieron a la convocatoria y al repudio de este brutal crimen. Miles de compañeros de diversas fábricas desfilaron encolumnados frente a la sede central del PST, donde se realizó el acto. En nombre del Comité Ejecutivo del PST, Nahuel Moreno pronunció un discurso reivindicando la historia de los compañeros asesinados y llamó a la más amplia unidad de acción para derrotar a la bestia fascista. “Al fascismo no se lo derrota en las elecciones” dijo, “...el fascismo tampoco se discute, se lo derrota en las calles, con los mismos métodos que ellos utilizan”. Y terminó haciendo un llamado a las corrientes allí presentes a construir brigadas o piquetes antifascistas para combatirlos.

El gobierno de Isabelita

En medio de esa turbulencia, el 1° de julio de 1974, a los 78 años, el general Perón muere de un infarto. La “Argentina potencia” prometida por Perón no consiguió salir del discurso, frustrando las ilusiones de los millones que creyeron en un supuesto proyecto de justicia social y liberación nacional. Dos días antes, su vice, María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, ya había asumido las funciones

presidenciales. Sin embargo, la verdadera conducción de ese nuevo período estuvo a cargo de José López Rega, un ex cabo de la Policía Federal que se dedicaba a la astrología, pero que esencialmente era un aventurero que se había introducido en el núcleo de Perón e Isabelita desde la época del exilio en Madrid. Desde el gobierno de Cámpora ocupó el cargo de ministro de Bienestar Social, cartera que utilizó para organizar a la banda fascista conocida como Triple A.

El nuevo gobierno peronista se fue enfrentando a un deterioro permanente de la situación económica producto de la crisis mundial del petróleo del '74. Bajo la orientación reaccionaria imperante, el 5 de febrero de 1975 la presidenta María Estela Martínez de Perón dictó el decreto denominado Operativo Independencia, que ordenaba al Ejército “aniquilar el accionar de elementos subversivos que actuaban en la provincia de Tucumán”, y colocaba a las autoridades constitucionales de esa provincia bajo mando militar.

En consonancia con esa política de ataques al movimiento obrero, el 22 de marzo el gobierno lanza un gigantesco operativo contra los metalúrgicos de Villa Constitución. Desde la Lista Marrón, los trabajadores habían derrotado a la burocracia sindical que respondía a Lorenzo Miguel e instalaron una conducción antiburocrática. Alegando un supuesto “complot subversivo”, el gobierno llevó a cabo un brutal ataque. Desplegó 4.000 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la policía provincial. Se allanaron las casas de los obreros, clausuraron el local de la UOM y detuvieron a la conducción y delegados del sindicato. La respuesta de la base fue heroica. Fueron dos meses de huelga con decenas de asambleas y actividades intentando ampliar la solidaridad con el conflicto que, Avanzada Socialista, nuestro periódico de esa época, definió como “la principal lucha librada bajo el actual gobierno”. Nuestro partido participó activamente, no solo impulsando la solidaridad y llamando a coordinar las luchas en curso con la huelga de Villa Constitución, sino integrando efectivamente el comité de lucha, que cumplió un importante papel a partir de la prisión de los compañeros de la dirección del sindicato. Finalmente, la terrible presión efectuada por el gobierno, la burocracia sindical y la patronal acabó derrotando esa huelga histórica.

El Rodrigazo y la descomposición del gobierno

En ese marco, el gobierno nombró a Celestino Rodrigo, hombre de López Rega, ministro de Economía. Asumió el 2 de junio y, junto con su viceministro, Ricardo Zinn, ligado a Martínez de Hoz, anunció su nuevo plan económico consistente en un tremendo ajuste. El plan, denominado “Rodrigazo”, consistía en una devaluación superior al 100%, aumento de los servicios públicos, liberación de los precios y suba de las tasas de interés. Pero además de la brutalidad de las medidas, apoyado en el Pacto Social aún vigente, limitaba el aumento de los salarios a un máximo de 40 por ciento. Con una inflación rondando 50%, muchos gremios ya habían negociado aumentos superiores, a los que el gobierno pretendía volver atrás con su tope. Eso despertó la furia de los trabajadores. La propia burocracia sindical se vio obligada a declarar la guerra y reclamar “paritarias libres”. Sin salida, y ante la presión de las bases, la CGT se vio obligada a decretar una huelga general de cuarenta y ocho horas los días 7 y 8 de julio. La masividad y la fuerza de la primera huelga general contra un gobierno peronista desestabilizó completamente el frágil andamiaje del gobierno. La presidenta se vio obligada a homologar todos los acuerdos salariales que se habían negociado, el poderoso y temible López Rega huyó del país y, dos días después, Rodrigo y Zinn renunciaron a sus cargos. El brutal ataque a la clase trabajadora y la respuesta con la huelga general iniciaron el fin del gobierno peronista.

El golpe se pone en marcha

Si bien después de este vertiginoso fin del lopezreguismo la burocracia sindical ganó algún espacio, lo que seguía determinando la situación era la impunidad de las bandas fascistas, como la Triple A, y su accionar represivo. Centenares de activistas políticos, sindicales y estudiantiles de izquierda aparecían muertos a diario en una completa banalización de la violencia. En ese proceso comenzó a establecerse el avance de un grupo de militares golpistas que habían comenzado a actuar, desde sus puestos, dentro del aparato represor del Estado.

En ese marco se dio lo que se conoció como la Masacre de La Plata. El 4 y 5 de septiembre de 1975 Roberto “Laucho” Loscertales, de Propulsora Siderúrgica; Adriana Zaldúa,

trabajadora del Ministerio de Obras Públicas; Hugo Frigerio, delegado gremial del mismo ministerio; Ana María Guzner Lorenzo, trabajadora no docente de la UNLP; Lidia Agostini, odontóloga; Oscar Lucatti, trabajador del Ministerio de Obras Públicas; Carlos “Diki” Povedano, trabajador de Previsión Social, y Patricia Claverie, todos militantes del PST, fueron secuestrados, torturados y fusilados cerca de la ciudad de La Plata por bandas fascistas que actuaban al amparo del gobierno peronista. En esos momentos la región de La Plata, Berisso y Ensenada también era escenario de varias luchas y nuestros compañeros participaban activamente en la solidaridad con el conflicto de Petroquímica Sudamericana. Hasta el día de hoy continuamos reclamando justicia contra este brutal crimen que aún permanece impune.

El colapso económico que vivía el país después del Rodrigazo no se consiguió revertir. El gobierno de Isabel Perón designó al “histórico” Antonio Cafiero, que al poco tiempo renunció, para dar lugar a Emilio Mondelli. Entre diciembre de 1975 y los primeros meses de 1976 el aumento de los precios se hizo insostenible y la inflación se disparó. El nuevo ministro no tuvo mejor idea que echar mano a la misma receta intentada por Rodrigo, por lo que la clase trabajadora, que acababa de protagonizar el Rodrigazo, a pesar de la traición desembozada de la burocracia sindical, respondió con fuertes luchas. La burguesía y los grandes grupos económicos tenían en claro que el peronismo ya no les servía para detener el ascenso. Frente a esta crisis, sectores de los partidos patronales, incluidos el propio peronismo y la burocracia sindical, al contrario de lo que planteaba el PST, de organizar un nuevo “Rodrigazo”, comenzaron a tender puentes con sectores golpistas. A esto se sumaba el propio radicalismo, que en palabras de su máximo líder de entonces Ricardo Balbín, afirmaba que “no tengo soluciones”, mientras insistía en que lo principal era “aniquilar a la guerrilla fabril”, eufemismo con el que llamaba a liquidar a toda la nueva vanguardia obrera que había surgido en esos años.

El 24 de marzo, ante la pasividad y, en algunos casos, la complicidad de los principales dirigentes radicales y peronistas, de los sectores patronales y de la propia burocracia sindical, María Estela Martínez de Perón fue detenida. Una junta militar anunciaba que se hacía cargo del poder, disolvía el Congreso, reemplazaba a los miembros de la Corte Suprema e intervenía todas las provincias. Esa misma noche bandas armadas de militares ocuparon las principales ciudades, detuvieron civiles y asesinaron decenas de personas. Comenzaba a escribirse una de las páginas más trágicas de nuestra historia que dejaría un saldo de 30.000 desaparecidos, millares de exiliados y una economía destruida al servicio de los intereses de las multinacionales y el imperialismo. Con ese tenebroso acto se cerró el proceso de ascenso iniciado con el Cordobazo.

Nota: parte de los datos y análisis tuvieron como fuente de información el libro Historia del PST, tomos I y II, del historiador Ricardo de Titto



Brasil. Seguir el ejemplo de las hinchadas de fútbol y la juventud negra

Brasil se está convirtiendo en “campeón mundial” del coronavirus. Según epidemiólogos, superaría pronto a los Estados Unidos. Este fin de semana pasó los 830.000 contagiados y 43.000 muertos. Este desastre es producto directo de la política del gobierno de Bolsonaro de negar la existencia de la pandemia y oponerse a hacer la cuarentena.

Ante este atentado a la vida, en las últimas semanas las hinchadas de fútbol, la juventud negra y los movimientos antifascistas realizaron protestas callejeras en repudio al gobierno de Bolsonaro y a la violencia policial en las favelas. A continuación publicamos un extracto del editorial de Combate Socialista del 9 de junio, periódico digital de la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST/PSOL), sección oficial de la UIT-CI.

La juventud negra se levanta para no morir “de virus, de bala o de hambre”, como lo expresan en las favelas de Río de Janeiro. Las protestas son porque en los barrios periféricos no hay saneamiento básico y los niños son asesinados por la Policía Militar. Las hinchadas de fútbol antifascistas decidieron decir basta a los actos de la extrema derecha, que pide una nueva dictadura militar y el fin de las medidas de aislamiento social.

Ampliar la movilización es el camino para salvar vidas del pueblo

Desde marzo los gobernantes saben que es necesario garantizar el aislamiento social. Pero hasta ahora el presidente Bolsonaro niega la existencia de la pandemia y esconde los datos de la contaminación y de los muertos (las cifras oficiales son menores que las reales). Los gobernadores y prefectos (intendentes municipales) comenzaron a suspender las pocas medidas de aislamiento social que había en los estados y ciudades en pleno crecimiento de los contagios de Covid-19 en el país. Los empresarios mantuvieron en funcionamiento locales de trabajo de sectores no esenciales. Y en los esenciales, como salud y limpieza, faltan los elementos de bioseguridad. O sea, las autoridades y los empresarios no hacen nada para salvar las vidas del pueblo trabajador y se niegan a garantizar medidas sanitarias básicas que recomiendan científicos y médicos.

Es necesario ampliar la movilización de protesta incorporando todas las reivindicaciones populares. Solo así seremos escuchados. En medio de la actual pandemia tenemos que respetar el distanciamiento físico de las manifestaciones y dejar en las casas a los que son del grupo de riesgo para que hagan solidaridad virtual.

Un ejemplo que demuestra que las manifestaciones logran resultados es que el Supremo Tribunal Federal tuvo que ordenar el fin de las operaciones policiales en las favelas, lo que es positivo (aunque no podamos confiar en la Justicia).

Unificar con la clase trabajadora

Las manifestaciones, que se van a repetir en las próximas semanas, muestran el camino para la clase trabajadora. Hoy la amplísima mayoría de los trabajadores no pueden realizar la cuarentena porque son obligados por los patrones o por las autoridades públicas a continuar en servicios no esenciales. En muchos casos, la continuidad del servicio ocurre en medio de la imposición de reducción salarial o de suspensión de contratos. Tenemos que organizar reuniones y movilizaciones para conquistar medidas de bioseguridad (...) exigir tests masivos de Covid-19

y contra toda reducción salarial o violación de contratos.

En la protesta de São Gonçalo (Río de Janeiro), la juventud cantaba “la favela organizó, el estudiante junto con el trabajador”, mostrando esa necesaria unidad. El sindicato del Metro de San Pablo convocó a la protesta antifascista y antirracista del domingo 7 de junio. En Río de Janeiro, el Sintuff (trabajadores de la Universidad Federal Fluminense) ayuda a organizar la unidad de los foros de lucha de Niterói. Son ejemplos que necesitamos ampliar ya mismo para enfrentar la represión lanzada sobre la juventud que está protestando en las calles en este momento.

Las direcciones de la CUT, CTB, UNE y UBES deben convocar a las protestas

Hasta ahora las direcciones de las mayores centrales, principalmente la CUT (Central Única de Trabajadores) y la CTB (Central Brasileña de Trabajadores), no convocaron a sus bases para las manifestaciones y no jugaron su peso en este movimiento. En el sindicato del Metro (subte), los representantes de esas centrales votaron contra la convocatoria a los actos. Y lo peor es que esas direcciones sindicales aceptan que les quiten los derechos laborales a muchos sectores. Lo mismo ocurre con la cúpula de la UNE (Unión Nacional Estudiantil) y UBES (Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios), que se han negado a convocar de verdad a las protestas de los domingos (...). Es fundamental exigir en cada sindicato, entidad estudiantil, movimiento social que las mayores centrales y organizaciones convoquen las protestas, con toda su fuerza y por todos los medios posibles. Tenemos que exigir que la CUT y la UNE convoquen a una jornada nacional de lucha, paralizando las actividades no esenciales.

Además de la lucha unificada necesitamos un frente de izquierda y socialista

El PDT (Partido Demócrata Laborista), el PSB (Partido Socialista Brasileño), y la REDE (Red de Sostenibilidad, partido ecologista), orientaron a sus afiliados a no ir a las protestas. Las direcciones del PT (Partido de los Trabajadores) y del PCdoB (Partido Comunista de Brasil) no divulgan los actos y no convocan a sus afiliados, se limitaron a decir burocráticamente que “apoyan”. El gobernador Camilo Santana, del PT del estado de Ceará, ordenó reprimir a los manifestantes. Es evidente que con esas direcciones no podemos vencer los actuales desafíos. Esos partidos de oposición deberían convocar a sus afiliados poniendo a sus parlamentarios al frente de los actos de protesta para evitar la represión a los manifestantes.

Lamentablemente, la dirección mayoritaria del PSOL se colocó en ese mismo campo y no se postula como alternativa de izquierda en la organización de las luchas en la calle. Algunos dirigentes del sector mayoritario del partido participaron en al-



gunas protestas, pero sin una convocatoria colectiva y organizada a la militancia. Aún estamos a tiempo para cambiar ese rumbo. Para eso necesitamos construir una alternativa con sectores de izquierda, como el PCB (Partido Comunista Brasileño), la UP y el PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado). Un frente de izquierda que defienda las manifestaciones y muestre que es posible resolver los problemas populares y hacer que la crisis la paguen los millonarios, los banqueros, las multinacionales y el agronegocio.

Continuar en las calles y organizar nuestro movimiento

En el plano inmediato, nuestra tarea es unirnos en las calles contra Bolsonaro y Mourão, en defensa de las vidas negras, por la cuarentena general inmediata. Para garantizar que se suspenda el pago de la deuda a los banqueros y se apliquen impuestos a las grandes fortunas destinando recursos a la salud pública y a la renta básica para los desocupados.

Por eso, cada movimiento y cada organización debe seguir el ejemplo de las hinchadas de fútbol y de los movimientos negros, tomando el impulso de las luchas internacionales. La unidad de las hinchadas, el movimiento negro y el Frente Pueblo Sin Miedo y sectores de izquierda del domingo 7 de junio fue muy positiva.

Es necesario que continúen convocando manifestaciones semanales los domingos y que las organizaciones sindicales, populares y estudiantiles planifiquen una jornada nacional con paralización de las actividades de la clase trabajadora.

Debemos organizarnos en nuestros sindicatos, universidades, oposiciones sindicales y luchar por la construcción de los actos, impulsar plenarios y foros de lucha que ayuden a organizar la unidad de las protestas en curso.

La reunión de la Secretaría Ejecutiva de la CSP-Conlutas (ala minoritaria combativa dirigida por organizaciones de izquierda) del 4 de junio aprobó el apoyo a las movilizaciones, y la corriente sindical Combate propuso la necesidad de que la central convoque a los actos. Seguiremos luchando para que esa sea la política de CSP-Conlutas

CAMPAÑA INTERNACIONAL: JUSTICIA POR GEORGE FLOYD



Sumate a la campaña por Justicia para George Floyd y firmá el petitorio:

A las organizaciones antirracistas, de derechos humanos, sociales y políticas de los Estados Unidos.

Los abajo firmantes apoyamos al pueblo norteamericano en lucha por justicia para George Floyd, cárcel a sus asesinos y contra el racismo y la represión de Donald Trump

Firmá en:

<https://forms.gle/Teg7h7qGRD538ywL8>

Estados Unidos. Asesinato de otro afroamericano

Cuando las protestas por la muerte de George Floyd siguen creciendo en el mundo, un nuevo caso de asesinato policial contra un afroamericano estremece otra vez a los Estados Unidos este fin de semana.

Un video de seguridad revelado este sábado muestra a un oficial de la policía de Atlanta que dispara contra un hombre negro, al que despiertan poco antes porque se encontraba durmiendo en un área de autoservicio que utilizan los restaurantes estadounidenses para entregar la comida en el carro. Rayshard Brooks, de 27 años, murió por el disparo.

Tras la difusión, miles de personas se lanzaron otra vez a las calles, principalmente en Atlanta, donde incluso bloquearon algunas carreteras para protestar contra el racismo y la brutalidad policial.

Estados Unidos. Declaran “zona autónoma” a un barrio de Seattle y expulsan a la policía

Tras las multitudinarias protestas por la muerte de George Floyd y luego de días de continuas batallas nocturnas con los manifestantes, los uniformados se retiraron por orden de las autoridades y clausuraron el edificio policial, lo que hizo posible el surgimiento de la “zona autónoma de Capitol Hill” (CHAZ, por sus siglas en inglés), un área de la ciudad libre de control policial. Trump amenazó con retomar el barrio con el ejército. Ver video: <https://youtu.be/pMrmf16qRBc>

Estados Unidos. Trump y los demócratas se acusan mutuamente de preparar fraude electoral

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, afirmó el miércoles pasado que su mayor preocupación es que “este presidente va a tratar de robar esta elección” y consideró la posibilidad de que Trump se niegue a dejar la Casa Blanca si pierde.

Trump dijo por su parte que, por la votación por correo, que sería la forma de hacer elecciones “con distancia social” debido a la pandemia, “será la elección amañada más grande de la historia”.



Estas acusaciones mutuas de fraude y de no querer dejar el poder, que pueden ser comunes en Bolivia o Centroamérica, son totalmente extraordinarias en los Estados Unidos y muestran una enorme crisis política. Los dos partidos imperialistas, el republicano y el demócrata, se alternan en el poder desde el siglo XIX. Una democracia para ricos, tramposa con los trabajadores, pero con reglas electorales que se han respetado históricamente entre ellos.

Estado español. Protesta de trabajadores de la salud

Los trabajadores de sanitarios de Madrid protestan a las puertas de los hospitales para denunciar la “precariedad laboral” que sufren desde hace años y para pedir que se refuerce la plantilla con más personal en todo el sistema de sanidad pública. Como dijo un trabajador indignado: “Los que más han dejado la salud, y algunos hasta la vida, han sido todo el personal sanitario y de atención social, mal pagados, mal considerados, y lo único que ven son los aplausos y solidaridad del ciudadano de a pie”.

Venezuela. ¡Libertad a Rodney Alvarez!

Un 17 de junio, hace nueve años, fue llevado a una de las cárceles del país, en la que no se respetan los derechos humanos, las libertades democráticas y donde no existe justicia para los trabajadores, el compañero obrero de Ferrominera Orinoco, Rodney Álvarez, sin condena y con una acusación absurda.

Desde esa fecha (17/6/2011), los gobiernos de Hugo Chávez y

Nicolás Maduro le impusieron un proceso de negación de justicia y violación del debido proceso. Lo acusan de un asesinato que fue cometido por un burócrata ligado al gobierno, que fue grabado por cámaras de la empresa y respaldado por el testimonio de cien trabajadores. Matones al servicio del gobierno dispararon sobre los trabajadores, hirieron a dos y asesinaron a otro. Lo culpaban a Rodney Álvarez sin ninguna prueba, solo para sacárselo de encima y asegurarse el oficialismo el control del sindicato.

Líbano. Desplome económico y nuevas protestas populares

En los mercados y restaurantes de Líbano apenas queda carne. No hay más importaciones por falta de dólares. El precio de los alimentos subió 70 por ciento. En algunas ciudades se suprimió el servicio eléctrico que dejó paralizados aún a los hospitales. Líbano se va ahogando cada vez más en el desastre económico.

En esta situación, y superadas las restricciones por el coronavirus, el sábado 13 miles de personas desfilaron por las principales ciudades exigiendo que se vaya el gobierno. En Trípoli las protestas se tornaron violentas, con enfrentamientos nocturnos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que dejaron al menos 120 heridos. En Beirut transcurrieron de forma pacífica después de dos noches de tensas manifestaciones.

Documental sobre la vida de Hugo Blanco

En 1962 Hugo Blanco, dirigente campesino, que era parte de la corriente trotskista encabezada por Nahuel Moreno, condujo una rebelión campesina indígena armada contra los hacendados. Los terratenientes, que los trataban como siervos del feudalismo, sometiéndolos incluso a castigos físicos para obligarlos a trabajar la tierra del patrón, ordenaron una feroz represión policial.

La rebelión inició un proceso en todo el país que culminó con la ley de reforma agraria que promulgó el gobierno militar de Velazco Alvarado.

Hugo Blanco fue encarcelado y condenado a muerte, acusado de “terrorismo y subversión”, aunque finalmente fue indultado y deportado.

La cineasta Malena Martínez Cabrera filmó un documental sobre la vida Hugo Blanco, que se puede ver en <https://youtu.be/R7Xmb0345II>

PARTIDO

Colaborá con la campaña financiera de **Izquierda Socialista**

Como todos los años, para esta fecha, nuestro partido está en campaña financiera recolectando aportes económicos para poder seguir interviniendo y acompañando las luchas políticas y sindicales, las de las mujeres, los estudiantes y los jubilados. Al contrario de los políticos patronales, que son financiados por multinacionales y grandes empresarios a quienes representan, Izquierda Socialista se construye con la militancia y los aportes que hacemos cada uno de los militantes, nuestros amigos y simpatizantes.

Sabemos que en la actual coyuntura, en medio de la pandemia del Covid-19, muchos no están trabajando, a otros les están pagando el salario de manera parcial, y los que viven de changas tienen más dificultades. La situación nos toca a todos los que vivimos de nuestro trabajo.

Sin embargo, te pedimos que hagas un esfuerzo. Cualquier aporte es más que importante para Izquierda Socialista, suma para que sigamos acompañando las luchas, para llegar a más lugares de trabajo, más escuelas, más barrios para que conozcan las propuestas de la izquierda y el Frente de Izquierda.

Por eso estamos en las fábricas codo a codo, peleando por una dirección sindical combativa, democrática, que no termine transando con los patrones como lo hace la burocracia sindical traidora de la CGT, que firma la baja de



salarios y la entrega de los convenios colectivos sin que le tiemble el pulso. Para fortalecer e impulsar el Plenario Sindical Combativo, donde buscamos coordinar las luchas en curso, integrando a los ferroviarios del Sarmiento del Pollo Sobrero, o los Suteba Multicolor, los docentes de Ademys o el Sutna, entre otras valiosas expresiones sindicales de base y democráticas, con sus luchadores a la cabeza. Y también, peleamos por una alternativa política de la unidad de la izquierda construyendo el Frente de Izquierda Unidad.

Estamos en las escuelas y universidades defendiendo la educación pública y a los docentes. Con los médicos, los enfermeros y los trabajadores de la salud que están haciendo meses en la primera línea peleando contra el Covid-19 y los gobiernos que, gestión tras gestión, vacían los hospi-

tales y las clínicas. Estamos en la lucha de las mujeres con nuestro espacio, Isadora, levantando el pañuelo verde por el aborto legal, seguro y gratuito y contra la violencia de género. Luchamos también por la defensa y el cuidado del ambiente, contra la megaminería de la Barrick Gold, la deforestación y la contaminación del planeta de la mano de empresas como Chevron o Monsanto. Porque como socialistas batallamos por un gobierno de los trabajadores en una pelea muy dura que damos contra el sistema capitalista. Pelea que debe ser mundial para poder emanciparnos. Para esto construimos la Unidad Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional, para unir a todos los trabajadores de todos los países y dar la pelea por un mundo socialista.

Apelamos nuevamente a tu aporte económico para sostener los enormes gastos que implican construir una salida política y sindical para millones de trabajadores. Los partidos patronales, como el peronismo, Cambiemos o cualquier otra variante, que solo te piden el voto y luego aplican los ajustes más salvajes contra los de abajo, reciben aportes de empresas y multinacionales.

Tu colaboración es fundamental para seguir creciendo y llegando cada día a más amigos y compañeros para construir una alternativa política socialista y de los trabajadores.